

L-619-11

FM/753

Universidad Central.

---

# DISCURSO

LEÍDO EN LA SOLEMNE INAUGURACIÓN

DEL CURSO ACADÉMICO DE 1911 Á 1912

por el Doctor

D. TOMÁS MONTEJO Y RICA

CATEDRÁTICO

de la Facultad de Derecho.



MADRID

IMPRENTA COLONIAL

(Estrada Hermanos.)

CALLE DE FUENTERRABIA, NÚM. 3.

1911









Universidad Central.

---

## DISCURSO

LEÍDO EN LA SOLEMNE INAUGURACIÓN

DEL CURSO ACADÉMICO DE 1911 Á 1912

Ayuntamiento de Madrid









FM/753

Universidad Central.

---

# DISCURSO

LEÍDO EN LA SOLEMNE INAUGURACIÓN

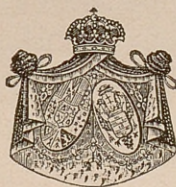
DEL CURSO ACADÉMICO DE 1911 Á 1912

por el Doctor

D. TOMÁS MONTEJO Y RICA

CATEDRÁTICO

de la Facultad de Derecho.



*Reg. 2414.*

MADRID  
IMPRESA COLONIAL  
(Estrada Hermanos.)  
CALLE DE FUENTERRABIA, NÚM. 3.

1911







Excmo. Señor:

En el curso que terminó ayer fallecieron los Catedráticos de la Facultad de Filosofía y Letras y de Ciencias de esta Universidad, de Sociología, de Numismática y Epigrafía, de Lógica fundamental, de Mineralogía y Botánica y de Análisis químico general, respectivamente, D. Manuel Sales y Ferré, D. Juan Catalina García y López, D. Manuel Sanz y Benito, D. Salvador Calderón y Arana y D. Juan Fagés y Virgili. Sean mis primeras palabras, siguiendo los dictados del corazón y una nobilísima práctica, para consagrarles un recuerdo de veneración y de respeto. Fueron hombres de alto entendimiento, de singular aplicación, nacidos para la ciencia y la enseñanza; el primero sociólogo esclarecido, insigne historiador; el segundo arqueólogo y numismático, y también historiador erudito; el tercero notable psicólogo; el cuarto naturalista, especialmente mineralogista, diligente y profundo investigador en estos órdenes del humano conocimiento; el último químico eminente. Y por ello ciencia y enseñanza les son deudoras de múltiples señaladísimos servicios. Se puede asegurar que la obra que han realizado y de que dan gallarda prueba, de una parte los numerosos libros y trabajos con que han engalanado nuestra literatura y han enaltecido nuestro nombre científico en el mundo, y de otra muchos de sus discípulos, que á estas horas han acreditado ya el excelen-



te criterio científico y pedagógico que de ellos recibieron, perdurará y valdrá de ejemplo y de estímulo, y que por ello y por haber dedicado su vida á aprender y á enseñar no sólo no serán nunca olvidados, sino que, al contrario, á cada momento serán recordados por cuantos en lo por venir, tratando de investigar la verdad ó de difundirla, crucen los caminos por ellos recorridos. Y más, si cabe, dentro de esta casa, á la que tanto amaron, en la que tan queridos fueron por todos, profesores y estudiantes, y en la que siempre reinarán los ideales más elevados y los más puros y hermosos sentimientos.

Ha muerto asimismo en el próximo pasado curso D. José Manuel Piernas y Hurtado, Catedrático que fué de nuestra Facultad de Derecho, en la que, entre otras, explicó varios años seguidos la asignatura de Hacienda pública; profesor notable, jurisperito, economista y hacendista ilustre, fecundo y afamado publicista, y, pues no llegamos á acostumbrarnos á considerarle apartado de nosotros por su jubilación y apenas ha mediado tiempo entre ésta y su muerte, y tantos fueron sus méritos, todo me lleva á no dejar de rendir en esta ocasión á su prestigiosa personalidad humildísimo pero sincero y sentido homenaje. No añadiré más, pues ello basta para mostrar la admiración que siempre me inspiró, sino que sería para mí ventura inefable saber recoger y utilizar la norma y el sistema para el estudio y la enseñanza que, pródigamente, ofrece su magnífica labor lo mismo en el orden científico que en el universitario.

Me complazco en saludar, desde esta tribuna, á los señores D. José Ortega y Gasset, D. Juan Cisneros y Sevillano, D. Juan Azúa y Suárez, D. Laureano Díez Canseco y Berjón, D. Luis Lozano y Rey, D. José Felipe Rodríguez y González, D. Quintiliano Saldaña y García, D. Rafael Mollá y Rodrigo y D. Gustavo Pittaluga y Fattorini, los cuales han tomado posesión en el anterior curso de las diferentes cátedras hoy á su cargo en esta Universidad. De probado saber



y amantes de las instituciones universitarias, contribuirán grandemente á la buena marcha de esta Escuela, la cual, por la entrada de tan dignos Profesores, podrá señalar el de 1.º de Octubre de 1910 al día de hoy entre sus más preciados anales.

Y cumplidos los deberes á que procedía atendiese en primer término, paso ya, á fin de cumplir igualmente el indeclinable honroso encargo que en su día recibí, á discurrir sobre *las instituciones modernas para prevenir ó resolver los conflictos entre patronos y obreros*, pero limitándome á algunas indicaciones, porque si no habría de ser prolijo y deseo molestar lo menos posible la atención del ilustrado concurso aquí presente.

\*  
\* \*

Habré de comenzar manifestando que me he decidido á tratar de la materia de que acabo de hacer mérito por razones varias.

Hace bastantes años, como socio del Ateneo de Madrid, escribí unos apuntes sobre Jurados mixtos, que fueron parte de los estudios con que aquella ilustre y docta Corporación contribuyó á la información escrita sobre reformas sociales que se hubo de practicar en virtud de la Real Orden de 5 de Diciembre de 1883. De entonces acá la idea del Jurado mixto, lejos de desvanecerse, se ha afirmado. Aún parece á la hora actual, en que con tanta frecuencia se producen los conflictos entre patronos y obreros y siguen acusando extraordinaria gravedad, digna de mayor consideración. Y me ha parecido que era esta ocasión para volver sobre asunto tan interesante.

A la vez, según es sabido, por ley de 19 de Mayo de 1908 (la cual reguló su composición y el procedimiento á que en el ejercicio de sus funciones se han de ajustar) fueron autorizados entre nosotros los Tribunales industriales, que más tar-



de hubo de determinar el Real Decreto de 20 de Octubre del mismo año citado, y á estas fechas obra en el Parlamento el proyecto presentado en 16 de Julio de 1910 por el Ministro de la Gobernación de entonces para dejar en suspenso la aplicación de la mencionada ley. En tal situación, que no es difícil comprender ha sido traída por asperezas de la realidad, vuelve á ser en España el de los Tribunales industriales, Jurados mixtos de los mencionados más arriba, asunto á estudiar. Y entiendo que toda indicación relativa al mismo que al presente se haga puede resultar de utilidad.

Y, por último, discuriendo sobre el tema señalado, vendré á poner de relieve una vez más la necesidad de fomentar la enseñanza universitaria de las ciencias sociales como base de adelanto en las jurídicas; y, por lo mismo que tengo la honra de pertenecer al claustro de la Facultad de Derecho, nada mejor he creído poder realizar en este acto solemne, el cual, por ser el de apertura de un nuevo curso, estimula á pensar en lo por venir avivando nobles y patrióticos anhelos. Y más recordando la poca fortuna de la Sección de Ciencias Sociales creada en 1900 en la Facultad de Derecho de esta Universidad. Porque se podría imaginar que la desdichada suerte de esa creación revela que la necesidad de ampliar el estudio de las ciencias sociales en los términos indicados no es tan cierta ni, en su caso, tan viva como queda expuesto, é importa que no se forme ese juicio, que no cunda el error que supondría y que lo pasado no sirva de obstáculo á determinaciones reclamadas por la marcha de la vida social y el simultáneo progreso del saber. Por todas partes se ha extendido ó tiende á ensancharse el cultivo de las ciencias sociales hermanadas con las jurídicas; los planes oficiales de enseñanza y las iniciativas libres de las Universidades avanzan por ese camino; el establecimiento entre nosotros de la Sección de Ciencias Sociales en la Facultad de Derecho de esta Universidad respondía á un movimiento general que, lejos de haberse detenido, aumenta cada



día; el éxito poco feliz de dicha Sección ha tenido, seguramente, por causa circunstancias pasajeras, y España, si no quiere quedar á la zaga de la generalidad de las naciones en lo que á la vida universitaria respecta, no debe substraerse á lo que es, en verdad, una exigencia capital de los tiempos.

\*  
\* \*

Muestran la razón y la experiencia que si en el momento en que surge y aun después de haber surgido cualquier conflicto colectivo entre patronos y obreros se ponen éstos en relación para ver si pueden llegar á un acuerdo es muy posible que el acuerdo sobrevenga y el conflicto no se produzca ó termine. Enseñan, igualmente, razón y experiencia que si, al surgir ó surgido ya el conflicto á que se ha aludido, no pueden las partes interesadas, por una ú otra causa, tratar entre sí con el fin de ver si cabe el acuerdo ó habiendo tratado no han llegado á él no hay otro modo de proceder, bajo el propósito de evitar ó de solucionar de una manera amigable la cuestión, que el de someter ésta á la decisión de árbitros. Y es claro que este medio será completo si las partes acatan el fallo, ó si, habiendo fundamento legítimo para obligarlas á que se atengan á él, se las obliga, en efecto, á que por él pasen.

Ante la posibilidad de los referidos conflictos colectivos, que, precisamente, tienen por distintivo el afectar á una masa ó conjunto de trabajadores frente á uno ó más patronos; ante la realidad de esos conflictos; ante su gravedad, puesto que suelen ser causa de múltiples perturbaciones y de desorden social; ante la lucha entre la clase patronal y la obrera, de que muchas veces son manifestaciones positivas los conflictos citados y que es un hecho característico de la época contemporánea, al cual han dado vida la substitución del régimen industrial de gremios ó corporaciones y de establecimientos





privilegiados por el de libre concurrencia, la concentración de la producción y el desarrollo de la grande industria que el último régimen indicado, la moderna maquinaria y otros adelantos y progresos han traído, y diversos factores más, morales, políticos, etc., y ante la enseñanza de que en los principios de la lucha de que se acaba de hacer mérito fué imposible ó punto menos que los patronos y los obreros tratasen entre sí con el fin de ver si podían llegar á un acuerdo, de que tampoco por diferentes motivos resultó fácil para ellos acudir al arbitraje pero que esto no obstante á él acudieron repetidamente, poco á poco se ha ido procurando facilitar los tratos para la conciliación, así como el uso del arbitraje, llegando al efecto á crear instituciones varias y á adoptar disposiciones importantes.

Y conviene ver, poniendo la atención en la marcha seguida en algunos países qué es lo que se ha hecho en el particular.

\*  
\* \*

En Inglaterra, según dicen Berthélemot y otros escritores, hasta 1860 no hubo sino tendencias vagas hacia una especie de reglamentación. Se establecieron algunos Consejos, pero por vía de ensayo. Las Trades-Unions, asociaciones que datan de principios del siglo XVIII, no habían llegado á desenvolverse por completo, y de la lucha de las mismas con los patronos, que se organizaron rápidamente, sólo salió la enseñanza, para trabajadores y empresarios, de que no debían gastar inútilmente sus fuerzas y de que era preferible aprender á conocerse primero y á entenderse después. Pero desde 1860 los sistemas de conciliación y arbitraje se desarrollaron grandemente. Por esa época se creó en Nottingham el Consejo de arbitraje de la industria de la bonetería, debido al industrial Mundella, el cual, después de haberse entendido con los



jefes de las fuertes asociaciones que había en el oficio, llegó á vencer la resistencia de sus colegas, así como los indicados jefes de asociación supieron dominar la intransigencia de los respectivos asociados. En este Consejo, compuesto por número igual de patronos y obreros, los Secretarios se habían de esforzar en arreglar el negocio; de no lograrlo, un Comité de investigación, formado por cuatro vocales, llamaba de nuevo á la conciliación, y si tampoco la conseguía, pasaba el asunto al Consejo, que se había de esforzar por el arreglo, y en defecto de éste pronunciaba una verdadera sentencia arbitral. Y para que el Consejo funcionase era preciso que por el conflicto no se hubiese cesado en el trabajo. Además, aquél no se limitaba á intervenir en las contiendas, sino que también había de procurar impedir que naciesen, á cuyo efecto formaba una tarifa muy completa de lo que se había de pagar por la mano de obra. Algunos años después de la fundación del Consejo Mundella, bajo la iniciativa del juez Kettle, se fundó otro en Wolverhampton relacionado con la industria de la construcción. Este Consejo difirió bastante del de Nottingham. Era un Consejo de arbitraje. Empezó por formar una verdadera reglamentación del trabajo, tras de lo cual sólo se debía reunir para juzgar las diferencias que pudiese producir aquélla en su aplicación. Era por lo mismo incompetente para juzgar sobre lo que no había reglado, y para resolver sobre las diferencias de que podía conocer no tenía procedimiento preestablecido. Pero hay que contar con que desde 1866, en que se modificaron sus estatutos, ya pudo entender de todas las cuestiones, y quedó establecido que cuando surgiese una diferencia que no afectase á los intereses generales del oficio, cada parte designaría un árbitro de entre los respectivos delegados, y el Consejo no entendería del negocio sino después que el indicado Comité hubiera fracasado en los intentos de conciliación. El Comité ha funcionado con notable éxito. Y es de advertir que para que el Consejo fun-



cionase no se hacía distinción entre interesados unionistas y no unionistas. Después de esto, sobre el tipo de los dos Consejos citados de Nottingham y de Wolverhampton, cada uno de los cuales se relacionaba con un oficio y una región, se formaron poco á poco la mayor parte de las numerosas instituciones de conciliación y arbitraje que funcionan en Inglaterra. En algunos distritos mineros, como los de Durham y Northumberland, y ciertos distritos metalúrgicos se han constituido dos Consejos, uno para todo el distrito minero ó metalúrgico, llamado á ocuparse de las cuestiones generales que afectan á todo el oficio, especialmente el curso de los salarios, y por bajo de él, en cada localidad, el Consejo local, encargado de aplicar á los casos particulares las decisiones del Comité central y de arreglar las dificultades locales. Algunas veces ciertos Consejos de los indicados han regulado la marcha de los salarios, formulando una tarifa móvil de los mismos. Y es de notar aquí de nuevo que, según han advertido Crompton, Bradlaugh, Holliday y otros, el éxito de los Consejos permanentes ha sido debido en gran parte á las asociaciones fuertemente organizadas, y á que, como ha dicho Crompton, los patronos han reconocido la independencia de los obreros aceptando la existencia de las asociaciones obreras, consideradas por los trabajadores como el secreto de su fuerza. Por eso con la ley de 1871 sobre las Trades-Unions, y las federaciones de distrito y los Comités nacionales que inmediatamente después se crearon, el desenvolvimiento de las instituciones de conciliación y arbitraje adquirió mayores vuelos. Y así se explica que, á partir de 1889, influyera muy mucho una evolución del unionismo en la formación de otros Consejos de un tipo bastante diferente á los anteriores. Al principio las Trades-Unions no comprendían casi más que á los Skilled Labourers, ó sea los obreros de una cierta habilidad profesional; no se había organizado, por consiguiente, la masa general de los obreros; bajo la influencia, sin embargo,



de hombres como John Burns, Bon Tillet, Tom Mann, acabó por producirse en esta masa un movimiento hacia la asociación; este movimiento llevó á la asociación puramente profesional; entre los neo-unionistas y las antiguas Trades-Unions hubo contienda, haciendo aquéllos á éstas el reproche de que la mayor parte de sus recursos los ponían al servicio de las cajas de socorro y de retiros, y no fomentando las huelgas habían venido á ser instituciones destinadas simplemente á reducir los impuestos de las clases acomodadas, y el espíritu perturbador de los neo-unionistas llamó muy pronto la atención de los elementos oficiales, porque donde los neo-unionistas se asociaban surgían conflictos. Era preciso, pues, establecer para ellos instituciones de conciliación y arbitraje. El tipo que, después de una amplia investigación, dirigida por la Cámara de comercio de Londres, pareció más conveniente fué el que se llamó los *Districts Boards of conciliation*, ó sea el de Consejos referentes á todos los oficios de una misma aglomeración, Consejos á propósito para las nuevas asociaciones, nacidas por regla general de los oficios pobres de las localidades, para las que no era fácil constituir Consejos por oficios. La iniciativa de la Cámara de Londres fué muy pronto imitada por otras Cámaras de comercio y por las uniones de una veintena de grandes poblaciones. Y conviene señalar que el Consejo de Londres se relaciona con centenares de profesiones; que se compone de un número igual de patronos y obreros, los primeros nombrados por la Cámara y los segundos por las uniones; que los estatutos han prescrito la formación en cada profesión de comités corporativos encargados de entender en la conciliación, de modo que sólo cuando fracasan pasan los negocios á ser del conocimiento de aquél, y que entonces el Consejo procura conciliar á las partes, y si no lo logra recomienda el empleo del arbitraje. Y hora es de decir con Paul Pic que la vitalidad y la importancia de las instituciones inglesas de conciliación y arbitraje, debidas á la



iniciativa privada, quitan en mucha parte interés á los sucesivos actos legislativos (1824, 1867, 1872, 1896) por los cuales se ha esforzado el Parlamento inglés no en substituir un tipo oficial rígido y uniforme á las múltiples combinaciones debidas á los acuerdos de los interesados sino en alentar y fortificar la acción de los Consejos privados. La *Conciliation act* de 1872 tenía un doble objeto: dar fuerza obligatoria á las convenciones de arbitraje entre patronos y obreros, y autorizar á los tribunales permanentes de arbitraje, á cuya categoría podían ser elevados todos los Consejos privados bajo ciertas condiciones, á fijar los salarios para el porvenir y á resolver sobre los conflictos individuales. La ley de 7 de Agosto de 1896, derogatoria de las anteriores, es completamente distinta: se limita á proponer á los Consejos existentes el beneficio de la investidura oficial, y á encomendar al *Board of trade* para los casos graves la misión de intermediario oficioso, invitando á las partes á que acudan á la conciliación y al arbitraje, y, además, la de promovedor de las instituciones arbitrales privadas. Queda sólo por indicar que por su carestía, su lentitud y hasta por no merecer la confianza de los interesados, en Inglaterra, según ha podido apreciarse, el arbitraje se ha desenvuelto mucho menos que la conciliación, y en lo que á ésta respecta, que los Consejos de distrito, por el modo de formarse, por no emanar de los no unionistas y otras causas, no han respondido á las esperanzas que su institución hizo concebir, como tampoco ha sido enteramente feliz la intervención del *Board of trade*; hechos que en cierto modo explican lo que, á propósito de la grave huelga habida en el Reino Unido en este mismo pasado estío, se ha podido leer en los periódicos sobre los *Conciliation Boards*.

En los Estados Unidos, por las condiciones de su vida económica y del exagerado individualismo que allí ha reinado, las relaciones entre patronos y obreros han llegado muchas veces á extremos de tirantez. Así que el medio era favo-



vable para que las instituciones que se examinan se desarrollaran. En 1870 empezó á preocuparse la opinión pública de los Consejos de arbitraje, que al decir de la prensa daban en Inglaterra los más excelentes resultados. Se hicieron estudios, varias tentativas tuvieron lugar, y aquellas instituciones, aclimatadas en condiciones particulares, fueron desenvolviéndose poco á poco. Sin embargo, nunca han merecido las simpatías y el amor que en Inglaterra, y así, según advierte Mr. Waterlot, los dos factores que más han contribuido á su desarrollo han sido las asociaciones obreras y la legislación oficial. La mayor parte de los Consejos de conciliación y arbitraje, debidos á la iniciativa privada, se han constituido con arreglo á los tipos ingleses Mundella y Kettle, y, por tanto, no ofrecen fisonomía original, pero no así los *Comités arbitrales de obreros*, que se han desenvuelto en un gran número de industrias bajo la égida de los *Caballeros del trabajo* ó de la *Federation of Labour*. En estos comités no figura el elemento patronal, pero entienden en las reclamaciones de los respectivos grupos, y contribuyen con sus investigaciones á prevenir los conflictos. Las iniciativas oficiales han tenido dos objetos: alentar la creación de consejos, dándoles algunas atribuciones y garantías, y organizar directamente los institutos de que se trata. En la Pensilvania occidental se votó en 26 de Agosto de 1883 una ley sobre los tribunales voluntarios industriales, ley en que se decía: «Considerando que las diferencias que se producen entre las personas empleadas en las distintas industrias de este Estado dan por resultado el engendrar huelgas y *lock-outs* que paralizan estas industrias, ocasionan grandes pérdidas á los patronos y á los obreros y parece que no se pueden resolver más que por el hambre y la fuerza, medios que reprueban el progreso humano y el espíritu de las leyes americanas; considerando que la apelación á árbitros voluntarios escogidos por las partes, con una igual representación de derechos



iguales y una discusión completa de las cuestiones litigiosas, constituye el medio más seguro de llegar, por concesiones mutuas, á una transacción satisfactoria y á hacer cesar el conflicto, y que la elección de un tercer árbitro, al cual se remitirán las partes para la decisión final en caso de desacuerdo, son procedimientos en armonía con los usos y costumbres de este Estado, por estas razones se ha decidido: Los presidentes de los tribunales de justicia de paz y los jueces que presidan cámaras en los condados, tendrán el deber, á la presentación de una solicitud ó de un convenio, de acordar la autorización para establecer en sus distritos respectivos tribunales para examinar y arreglar los conflictos entre patronos y obreros.» La petición ha de ser hecha por 50 obreros como minimum, 5 jefes de establecimientos ó 5 patronos que empleen por lo menos diez obreros cada uno, ó por los representantes de un establecimiento con 75 ó más trabajadores; ha de designar los nombres de los individuos que deben formar el tribunal y el del árbitro tercero; y el juez, después de haber autorizado la creación del tribunal arbitral, fija el día y el lugar de la primera reunión. El número de árbitros pende de la voluntad de las partes, aunque ha de ser por lo menos de dos patronos y dos obreros, y sus funciones duran un año. La misión principal de estos Consejos es la de resolver sobre las cuestiones generales, tales como la de fijación de salarios, número de horas de trabajo, etc., pero pueden juzgar también sobre las dificultades de interpretación de los contratos y decidir sobre diferencias individuales, como los Consejos de *prud-hommes*, casos en los que sus sentencias son ejecutorias después de haber sido registradas por los tribunales ordinarios. La iniciativa de Pensilvania fué seguida después por varios Estados. Pero, además, también han sido establecidos Consejos oficiales de conciliación, los cuales son organizados del todo por la ley. Según Pic los hay en una veintena de Estados de la Unión, siendo los más anti-



guos y que, en más ó en menos, han servido de modelo los de Massachusetts y de Nueva York. El primero, según las leyes de 1886 y 1887, comprende tres miembros, designados por el Gobernador del Estado, un patrón, un obrero y un tercero bajo la indicación de los otros dos. Las funciones de los elegidos duran tres años. Pueden entender á instancia de parte ó de oficio. Pueden oír testigos, recibir declaraciones bajo juramento y exigir la exhibición de los libros referentes al pago. Deben procurar que las partes se concilien y dictar sus sentencias á las tres semanas de intervenir, sentencia que se hace pública. Y si las partes no llegan á la conciliación y no consienten en someter sus diferencias al Consejo, éste, no obstante, puede seguir sus pesquisas, declarar de qué lado pesa la responsabilidad y publicar su declaración. El pensamiento del legislador de Nueva York fué constituir un tribunal de segundo grado para resolver las diferencias que no hubiese podido terminar un primer Consejo elegido por las mismas partes. Así quiso la ley desenvolver la idea del arbitraje y alentar á las asociaciones á crear Consejos privados. Pero, además, el oficial, compuesto por un patrono, un obrero y un tercero designado por ambos, todos tres nombrados por el Gobernador, puede entender directamente si las dos partes consienten y se comprometen á continuar el trabajo sin huelga ni *lock-out* hasta el pronunciamiento del fallo. Y todos estos Consejos han dado buenos resultados, ejerciendo, como los Comisarios colocados á la cabeza de las Oficinas del trabajo, una acción pacificadora positiva.

Varios cantones suizos han instituído Consejos oficiales de conciliación, compuestos de un número igual de delegados patronales y obreros, bajo la presidencia de un Consejero; pero nada han previsto sobre la constitución de un tribunal de arbitraje para el caso de fracasar la tentativa de conciliación, que, por otra parte, es facultativa.

En Alemania, según expresa Waterlot, la situación del



maestro frente á sus obreros estuvo hasta 1869 detalladamente regulada por los estatutos corporativos, severamente sancionados con penalidades rigurosas; estaban prohibidas las coaliciones, y las controversias debían ser examinadas por los maestros. La ley de 1869 abolió este régimen, y esta ley, que proclamó el principio de libertad, organizó nuevas instituciones. Desde 1881, á falta de toda organización especial, las diferencias entre patronos y obreros eran deferidas á las autoridades comunales, y había además tribunales regionales, tribunales arbitrales organizados por los comunes, que en muchas partes no tuvieron más misión que la de la conciliación, sin que sus sentencias fuesen ejecutorias, y los tribunales de corporación llamados á juzgar las diferencias que surgiesen entre los miembros de las mismas. Pero los inconvenientes y los defectos de esta cuádruple organización fueron advertidos muy pronto. Y en 1890 se establecieron, bajo un tipo uniforme, los tribunales industriales, que han acabado de regular las leyes de 1901 y de 1904, quedando, no obstante, subsistentes los tribunales corporativos y regionales, si bien sujetos á ciertas transformaciones. Los industriales, además de conocer de las diferencias individuales, pueden intervenir también como conciliadores ó árbitros en los conflictos colectivos, siempre que las partes estén conformes. Y es de notar que no es preciso que todos los obreros consientan en deferirles la cuestión, porque un grupo cualquiera, por pequeño que sea, puede representar al elemento obrero, así como siempre que su número sea superior á tres pueden los obreros designar un representante único, encargado de actuar en su nombre en el curso del procedimiento; que cuando el tribunal funciona como órgano de conciliación ó de arbitraje se unen á él hombres de confianza de los patronos y de los obreros en número igual, designados por los interesados y que no pueden ser elegidos entre los mismos, ó que en su defecto son designados por el Presidente; que si se llega



al acuerdo se levanta acta, haciendo constar las bases de la inteligencia; que si, por el contrario, la conciliación no se consigue, el tribunal debe dictar, bastando al efecto la simple mayoría, una sentencia arbitral; que de haber empate entre los representantes de los patronos y los de los obreros, el Presidente tiene el derecho de votar ó de abstenerse, en cuyo último caso declara que la sentencia no ha podido ser dictada, y que ésta es notificada á las partes y publicada de oficio, pero, á diferencia de lo que ocurre con las que pronuncian en los conflictos individuales, no tiene fuerza ejecutiva. Mas en Alemania existen á la par instituciones privadas de la mayor importancia. En un gran número de fábricas ó explotaciones, y bajo los nombres más diversos, han sido creados Consejos muy análogos á las Cámaras de explicación belgas de Mariemont y Bascoup. El terreno, dice Mr. Berthélemot, estaba preparado para su constitución. Desde hacía tiempo los patronos habían fundado, con la ayuda de sus empleados, cajas de socorros, que las leyes alemanas sobre la asistencia han hecho casi inútiles hoy. Las cajas de socorros eran administradas por comités mixtos de agentes del patrón y de los empleados, que muy pronto fueron aptos para regular los pequeños negocios diarios del taller. Y así que más tarde, hacia 1889, cuando el movimiento social se acentuó de una manera sensible, las funciones conciliadoras acrecieron. Después, según Mr. Freese y otros, han ido en aumento, pareciendo una fórmula popular en Alemania. Y según el profesor Sering, se pueden distinguir tres tipos generales. Al primero pertenecen aquellos que sirven solamente para transmitir al patrono los deseos de los obreros: se componen casi siempre únicamente de obreros, y no tienen más que voz consultiva, aun en lo tocante á las instituciones de previsión. El segundo grupo comprende Consejos de más amplias atribuciones: tienen voz deliberativa en la dirección de los institutos de que se acaba de hacer mérito, y, en general, un cierto





poder disciplinario sobre los obreros. En el tercer grupo los miembros obreros del Consejo discuten el contrato de trabajo con el patrono, aseguran el orden en la fábrica, administran las instituciones de previsión, deciden sobre todas las cuestiones concernientes al bienestar de los obreros y á sus relaciones con el patrono, se ocupan en lo relativo á aumento ó disminución de salarios y fijan el reglamento del taller. Algunas veces son todos los obreros y no sus delegados quienes, reunidos en asamblea general, adoptan los acuerdos. Y fácil es comprender el porqué de su éxito; lo expresan estas palabras de un patrono, que Berthélemot transcribe: «Por este cambio recíproco de ideas y de opiniones libres y sin doblez, yo he recogido muchas ideas, que han dado lugar á innovaciones interesantes, y he visto nacer y desarrollarse la confianza recíproca, y despertarse el sentimiento de la comunidad y de la solidaridad de intereses. Yo veo estos debates, dado el espíritu práctico que los preside, de tanta importancia y eficacia para establecer la paz social como los sindicatos departamentales ó regionales, en donde los agitadores se pueden sobreponer y comprometer desde el principio la inteligencia que se quiere alcanzar. La importancia de estos Consejos representativos de obreros es seguramente muy grande. Esta manera de reunir los diversos elementos de una empresa para hacerlos cooperar en su dirección, no puede dejar de contribuir de un modo efficacísimo á mantener la concordia y la paz en el mundo industrial.»

Austria, en lo que afecta al régimen de la industria, ofrece una fisonomía especial. Según palabras del príncipe Lichtensstein, el objetivo de la legislación es el de «restaurar las corporaciones antiguas bajo una forma compatible con el espíritu moderno y los orígenes de la industria contemporánea». Y esto puede explicar el escaso desenvolvimiento en este país de las instituciones de referencia. En toda corporación funciona una Comisión arbitral encargada de conciliar, y si



las partes la quieren por árbitro, de dirimir las diferencias que puedan surgir en el seno de la Corporación entre patronos y obreros. Mas, según advierte Pic, desde la reforma de 1896, extendiendo á la pequeña industria la competencia de los tribunales industriales, las Comisiones corporativas sólo resuelven sobre los conflictos industriales excepcionalmente y á falta de tribunal industrial en la circunscripción. Para la grande industria, que está fuera del régimen corporativo, habiéndose querido vanamente imponer la constitución de Consejos de fábricas ó explotación, no existen instituciones oficiales de conciliación, siendo las autoridades administrativas ó el inspector del trabajo los que á menudo ofician de conciliadores. Y para concluir sólo queda por manifestar que, si bien hay algunos Consejos de fábrica ó explotación debidos á la iniciativa privada, el Gobierno, según se ha dicho, quiso extenderlos imponiendo su constitución, y tal intento no pudo ser realizado.

Bélgica ofrece aspecto muy distinto. Allí la organización sindical de los obreros es bastante poderosa, y el legislador ha sabido caminar contribuyendo á su desenvolvimiento y substituyendo la iniciativa oficial á la privada donde era necesario. Según Mr. Vermeersch, se ha llegado á una intervención moderada, aceptable para los que salen poco á poco del optimismo liberal sin pasar al extremo opuesto del pesimismo socialista, y que por sus tradiciones nacionales no fían mucho en el Estado y en la centralización. Y según Berthélemot, este juicio se puede aplicar á maravilla á las dos leyes destinadas á la conciliación y al arbitraje, la ley de 1887, que ha instituído los Consejos de la industria y del trabajo, y la ley de 1896, sobre la consulta obligatoria á los obreros para modificar los reglamentos de taller, idea aplicada también en Alemania. Los Consejos de la industria y del trabajo son á la vez Consejos de conciliación, asambleas representativas y oficinas de investigación y de consulta administrativas. Se di-



viden en tantas secciones cuantas las hay de industrias; secciones que tienen vida propia y que son elegidas por los miembros de aquellas que representan, habiendo de estar compuestas por un número igual de patronos y de obreros, no inferior á seis ni superior á doce, designados por el mismo cuerpo electoral que elige los *prud-hommes*. Y por medio de esas Secciones están llamados á entender en los conflictos colectivos, desde el momento que parece lo exigen las circunstancias. En vista de la demanda de los patronos ó de los obreros el presidente, el gobernador de la provincia ó el burgo-maestre convocan á la Sección correspondiente, que ha de buscar los medios de conciliación; y si no se puede llegar al acuerdo, se resume la deliberación en un acta que se hace pública. Pero la Sección funciona sólo como conciliadora. Las partes pueden, sin duda, entenderse para elegir uno ó varios árbitros y hasta escogerlos entre los miembros de la Sección, mas esto ya con arreglo al derecho común, porque la ley de 1887 no contiene á este propósito prescripción alguna especial, á diferencia de lo que acontece en otros países, por ejemplo en Holanda, en donde las Cámaras de trabajo, caso de no conciliación, deben esforzarse en inducir á las partes á someter á árbitros el litigio. Y hay que lamentar que los resultados rendidos por las Secciones descritas de Bélgica no han sido enteramente satisfactorios. Quizás haya sido, según apunta algún escritor, por no ejercer su influencia sino después de haber estallado la huelga y no desempeñar la función preventiva de la conciliación, pero es lo cierto que, conforme advierte Mr. Payeu, los Consejos de la industria y del trabajo se abstienen muchas veces de intervenir sin causa suficiente, y cuando intervienen fracasan en la mitad de los casos. Así como desde el punto de vista de la representación profesional y en cuanto cuerpos consultivos han dado excelente fruto, incluso para pacificar las relaciones entre obreros y patronos, como órganos de conciliación no. Pero, en cam-



bio, algunos esfuerzos de la iniciativa privada han ido por otro camino. Bélgica, como dice un autor citado, es uno de los países en donde con más fortuna se ha hecho uso de los Consejos de fábrica ó explotación. Después de una huelga inexplicable de sus obreros, las Compañías mineras de Bas-coup y de Mariemont encargaron á uno de sus ingenieros, Mr. Julien Weiler, que buscara los medios más á propósito para evitar en lo por venir toda clase de conflictos. Weiler se inspiró principalmente en las ideas de Crompton, el autor del libro que pasa por fundamental en materia de conciliación entre patronos y obreros. Como éste, pensaba en el peligro que hace correr á la grande industria la separación que en ella se produce entre empresarios y trabajadores, los cuales no se comunican sino por medio de agentes, no solamente irresponsables, sino á menudo interesados también en el mantenimiento de los abusos. Y por ello introdujo el sistema de las Cámaras de explicación, destinadas, no á cortar de una manera pacífica las diferencias, como los Consejos de conciliación ó de arbitraje, sino á impedir que surjan. Weiler creó un triple organismo: en cada taller y para cada profesión una Cámara de explicación, compuesta de representantes de la Compañía y de delegados obreros en número igual, que se había de reunir cada mes á fin de conocer todas las reclamaciones de los obreros relativas al salario, reglamentos, multas, etc.; las oficinas de conciliación, con representación igualmente de patronos y obreros, para entender en los negocios no conciliados por las Cámaras de explicación, y un Consejo central de conciliación y arbitraje para los asuntos no arreglados por las Oficinas de grupo. Este Consejo no tiene reuniones periódicas, se reúne para cada negocio, recurre desde luego á la conciliación, y de no lograrla pronuncia sentencia, en la inteligencia de que si hay empate no se acude á un tercer árbitro, sino al Consejo de administración de la Compañía, prerrogativa ésta que es la única dejada es-





pecialmente al patrono. Hay que advertir además que el Consejo no puede juzgar si hay suspensión de trabajo antes de que el negocio sea sometido á su examen, y que su sentencia debe de ser observada durante tres meses, sin que se pueda representar ante él durante este plazo. El éxito de estas instituciones ha sido notable, habiendo suscitado entre muchas gentes la más viva admiración. Y otros Consejos de explotación se han establecido en Bélgica. Pero hay que reconocer que, ello no obstante, sea por la resistencia injustificada de muchos patronos á admitir la intervención de sus obreros, y por el desarrollo del movimiento sindical, sea por otras causas, no se han propagado tanto como era lógico esperar.

En Francia, al decir de varios escritores, la historia del arbitraje data de ayer: las instituciones de conciliación no pudieron nacer hasta que se proclamó la libertad de coalición y la libertad de asociación. Pero se registran algunas instituciones con anterioridad á la ingerencia legal, arbitrajes accidentales, consejos accidentales, consejos permanentes, éstos últimos por la intervención de sindicatos obreros existentes antes de la ley de 1884. Fué en 27 de Diciembre de 1892 cuando ya se dictó la ley sobre conciliación y arbitraje, disponiendo que al surgir ó surgida una huelga, cada una de las partes interesadas podrá dirigirse al juez de paz con el fin de intentar la conciliación, y que si la huelga ha estallado el juez podrá intervenir de oficio, citando á ambas partes; que en uno y otro caso, si los interesados rehusaren ó no respondiesen la repulsa se hará pública; que si aceptasen, se celebrará una reunión de representantes, aunque éstos fueren en número desigual, pero no pasando de cinco por cada lado; que reunido así el Comité de conciliación, deliberará y procurará el acuerdo, que habrá de ser tomado por unanimidad, siendo de notar que el juez, aunque sin voz ni voto, habrá de asistir á estas deliberaciones; que si hay acuerdo, el juez levantará acta, expresando la convención; que si no hay acuerdo, levantará



también acta, haciendo constar que no ha habido avenencia; é invitará á las partes á recurrir al arbitraje, y que esta invitación, como la de la conciliación, podrá ser rechazada, en cuyo caso este hecho se hará público, anunciándolo en el Juzgado de paz y en las casas consistoriales; que si las partes aceptan el arbitraje, la composición del tribunal quedará á su voluntad; que los árbitros, que deben ser ciudadanos franceses, una vez reunidos, procurarán entenderse; que si no lo consiguen, designarán un árbitro dirimente con las mismas facultades que los anteriores y no obligado á conformarse con el parecer de ninguno; que si los árbitros no se entendieren para el nombramiento del dirimente, le hará el Presidente del Tribunal civil, y que la sentencia arbitral se publicará. Esta ley no ha dado los resultados que de ella se esperaban, y ya se han hecho diferentes propuestas para su reforma. En 1900 se trató de organizar Consejos de trabajo, de cuyas secciones salieran Comités de conciliación y tribunales arbitrales, pero una ley de 1908 ha impedido el desenvolvimiento del sistema. Mas si tales deficiencias ofrece la legislación hay que tener en cuenta que también en Francia ha habido y hay iniciativas particulares de interés. Se pueden citar varios establecimientos industriales de importancia, el Creusot singularmente, donde han sido adoptados los Consejos de fábrica ó explotación.

En Italia, con el establecimiento de los *probiviri* por la ley de 15 de Junio de 1893, se ha seguido el sistema de la ley alemana de Tribunales industriales. Los *probiviri*, como estos últimos tribunales, tienen la doble misión de juzgar en las controversias entre patronos y obreros provenientes del contrato de trabajo ó del de aprendizaje, y de conocer como conciliadores ó árbitros, sin que su decisión tenga fuerza ejecutiva, de los conflictos colectivos que los interesados les sometan de común acuerdo.

En España, amén de las iniciativas particulares que la vigente ley sobre Consejos de conciliación ha querido consa-



grar, diciendo en su último artículo que los Consejos de esta clase ó jurados mixtos ya establecidos en determinadas comarcas ó poblaciones por medio de reglamentos presentados y registrados en los respectivos Gobiernos civiles, que hayan funcionado con anterioridad á la publicación de la ley, serán respetados en su organización y funciones, reconociéndoles, previa aprobación del Gobierno, las mismas prerrogativas que la ley otorga á los que crea, y aparte otras iniciativas privadas de menor resonancia, la legislación sobre la materia está en la referida ley, promulgada en 19 de Mayo de 1908. Antes se había formulado algún que otro proyecto de ley, por ejemplo, los de 1870 y 1873, mas hay que considerar la ley citada como la expresión de nuestra legislación positiva. Según dicha ley, cuando se prepara una huelga, ó por lo menos antes de que transcurran veinticuatro horas desde que estalló, los obreros que en ella tomen parte lo pondrán en conocimiento del presidente de la Junta local de Reformas sociales, por escrito, en papel común y por duplicado, expresando sucintamente las pretensiones que motivan la huelga y el nombre y domicilio del patrono ó de los patronos á quienes afecte. Asimismo, cuando uno ó varios patronos hayan resuelto el paro de sus respectivas industrias ó explotaciones ó de una parte considerable de ellas, lo pondrán, con una semana de antelación, en conocimiento del presidente de la Junta local de Reformas sociales, por escrito, en papel común y por duplicado, expresando, además, sucintamente las causas que determinen el paro, el sitio donde se hallen enclavados sus establecimientos, fábricas, minas ó talleres y el número de obreros que á consecuencia del paro hayan de quedar sin trabajo. Y cuando surja una cuestión entre un grupo de obreros y uno ó varios patronos, cualquiera de las partes interesadas podrá ponerlo en conocimiento del presidente de la Junta local, por escrito, en papel común y por duplicado, expresando sucintamente el objeto de la cuestión y las gestio-



nes practicadas para resolverla. Y es de advertir que, con arreglo á lo determinado en los artículos 20 y 21, los jefes ó promovedores de una huelga que no cumplan el precepto de que se ha dado cuenta en primer término, y el patrono ó patronos que no cumplan el indicado en segundo lugar, serán castigados respectivamente con multas de 5 á 150 y de 250 á 1.000 pesetas. El presidente de la Junta local dará traslado del escrito á la otra parte en las veinticuatro horas siguientes, fijándose un plazo prudencial muy breve para que manifieste si acepta ó no sus buenos oficios. Cuando la respuesta sea afirmativa, irá acompañada de un escrito de contestación igualmente sucinto. Cuando la respuesta fuere negativa, se comunicará á la otra parte, dándose por intentada la conciliación. El escrito de los patronos será firmado por el patrono ó los patronos interesados ó por quien de éstos, con la autorización de los demás, lleve su voz, y el de los obreros por el ó los autorizados para llevar la voz de los demás, y tanto los patronos como los obreros afirmarán por su honor en la antefirma la certeza de las autorizaciones que ostenten. El presidente, una vez que tenga en su poder ambos escritos, designará, con la brevedad posible, para formar con él el Consejo de conciliación seis jurados, tres de la lista elegida por los patronos y tres de la elegida por los obreros, con arreglo al artículo 12 de la ley de Tribunales industriales. Reunido el Consejo, examinará los dos escritos y acordará si conviene trasladarse al lugar del suceso ó citar á las partes á su domicilio social, procediendo en todo caso con la mayor actividad. Los interesados ó quienes les representen expondrán de palabra, por el orden que fije el Consejo, los fundamentos de sus pretensiones respectivas. El Consejo podrá oír el dictamen de cualquiera otra persona extraña á los interesados cuando lo estime necesario. Procurará ante todo recabar de las partes que ni los patronos suspendan el trabajo ni los obreros lo abandonen mientras se tramita la conciliación, y propondrá luego los



términos de ésta. Lograda la conciliación, sus términos se consignarán en un escrito que firmarán los interesados ó sus representantes y quedará depositado en el domicilio del Consejo. Las copias, autorizadas por la firma de dos consejeros, con el visto bueno del presidente, tendrán la fuerza probatoria de un documento público. Si el Consejo no pudiese obtener la avenencia propondrá á las partes que designen personas plenamente autorizadas para seguir tratando en su nombre, y las partes, de común acuerdo, podrán nombrar una sola. El mandato podrá conferirse á toda persona capaz para contratar, hombre ó mujer. Si ésta fuere casada aceptará el cargo con autorización verbal de su marido, en el caso de que no estuviese ya autorizada para ejercer el comercio. Podrá también conferirse á los miembros del Consejo de conciliación. Las partes, en presencia del Consejo, convendrán los términos de la escritura de compromiso, pudiendo estipular sanciones pecuniarias para el caso de incumplimiento del laudo que se dicte. El Consejo redactará el escrito de compromiso de acuerdo con lo convenido y lo someterá á la firma de las partes. El árbitro ó árbitros resolverán acerca de todos los extremos del escrito de compromiso, y cuando la naturaleza del asunto lo requiera, determinarán las condiciones necesarias para que el fallo se entienda cumplido ó el plazo durante el cual ha de regir. Si una ó las dos partes no comparecieren ó no pudiera lograrse la conciliación ni el compromiso en árbitros, ó, no obstante haberse logrado temporalmente, la huelga ó el paro continuasen, el Consejo, de oficio, citará nuevamente á los interesados cuando lo crea oportuno, procediendo en la forma anteriormente expuesta, y si esta segunda vez la conciliación y el arbitraje fracasasen por cualquier causa, se hará constar así y no se realizarán ulteriores gestiones sino á petición de ambas partes, consignada y firmada en un solo escrito. Si el Consejo lo estimase útil, podrá consignar en acta su opinión sobre el caso y publicarla de oficio. Las



partes podrán obtener también copia de estas actas y publicarlás, pero si lo hicieren en extracto ó parcialmente serán condenadas á la multa de 25 pesetas. En los partidos judiciales donde no exista Tribunal industrial, el presidente de la Junta local designará entre los vocales de esta Junta los individuos que hayan de formar con él el Consejo de conciliación. Y, por fin, el presidente de la Junta local de Reformas sociales podrá convocar cuando lo estime oportuno, en vista del número y la frecuencia de los casos en que se acuda á sus buenos oficios, la Junta magna de electores prevista en el artículo 13 de la ley de Tribunales industriales (la de todos los patronos y todos los obreros inscritos en el censo electoral) y en esta Junta y en la forma que dicho artículo determina (proponiéndose á los asistentes que de común acuerdo señalen la forma en que deberán elegir el número de jurados á que tengan derecho, bien agrupándose en secciones ó de oficios afines ó de fábricas ó establecimientos industriales, bien formando colegios electorales por barrios ó pueblos, ó adoptando cualquiera otra forma que unánimemente se estime preferible), podrán constituirse Consejos de conciliación permanente, distribuyendo á los jurados en secciones, que presidirá el Consejero de más edad por industrias ú oficios afines, fábricas ó establecimientos distintos, barrios ó pueblos separados. Poco es el tiempo que lleva en vigor esta ley, y no tengo datos bastantes para poder formar juicio sobre sus resultados, mas ante los consignados en la estadística de huelgas publicada por el Instituto de Reformas sociales, y ante lo que á la vista de todos está sucediendo en las numerosas huelgas de estos años, temo que hasta ahora los resultados no hayan correspondido á los buenos propósitos del legislador.

Y hay, en fin, algunos países, como Nueva Zelanda y los Estados Australianos, en que se ha llegado á establecer el arbitraje obligatorio. Á consecuencia de la huelga marítima de 1890, el Parlamento de Nueva Gales adoptó una ley llamada





de conciliación y de arbitraje. La Australia del Sur avanzó en 1894 en la aplicación de este último. El mismo año 1894 el Gobierno de Nueva Zelanda sometió al Parlamento un proyecto de ley, á fin de alentar la formación de Sindicatos obreros y de facilitar la solución de los conflictos industriales. Esta ley, modificada sucesivamente desde 1895 por diferentes actos legislativos, es la primera que estableció el arbitraje obligatorio, el cual ha sido aceptado luego por las de Nueva Gales, la Australia occidental y la federal de 15 de Diciembre de 1904. Según la ley neo-zelandesa, todas las diferencias que las partes no han podido terminar amigablemente por una convención, deben ser sometidas al Consejo de conciliación, compuesto de un número impar de miembros (dos ó cuatro nombrados por las uniones registradas de patronos y de obreros y un presidente extraño á la profesión designado por los delegados); el Consejo, con el concurso de un agente especial, nombrado por el Gobernador, procede á una información detenida; después enuncia su parecer (recommandation); si las dos partes no se conforman con el acuerdo, el negocio debe ser llevado ante el Tribunal Central de arbitraje, compuesto de tres miembros, nombrados por tres años por el Gobernador, uno designado por los obreros, otro por los patronos y el tercero de entre los jueces del Tribunal supremo. El Tribunal central es ambulante, funcionando, según los casos, en los diversos distritos industriales. Tiene todas las facultades de investigación necesarias, incluso la de exigir la exhibición de libros y aun de dar á las partes conocimiento de ellos en la medida conveniente. Su principal misión es la de dictar sentencias, valederas por el tiempo que señala, siempre que no exceda de tres años y salvo seguir en vigor hasta ser reemplazadas por los oportunos contratos, ó que las partes las denuncien, ó el Sindicato obrero las haga borrar en los Registros; y hay que advertir que el Tribunal puede modificar sus sentencias, ya para subsanar un error, ya pa-



ra hacerlas más eficaces, y tanto á instancia de parte como de oficio. Pero, además, el mismo Tribunal conoce de los negocios relativos á la aplicación de las leyes industriales, las interpreta y castiga las infracciones cometidas, y sanciona con multas los contratos colectivos celebrados espontáneamente ó con el concurso de los Consejos de conciliación, y sus propias sentencias. Y en tanto que el asunto está pendiente del Consejo de distrito ó del Tribunal, están prohibidos los *lock-outs* y las huelgas bajo pena de multas, que se pueden elevar á 1.250 francos. La ley de la Australia occidental está calcada, en general, en el texto de la neo-zelandesa. La de Nueva Gales del Sur sigue también á la de Nueva Zelanda, pero, además de prohibir de una manera más absoluta la huelga, no establece ni distritos ni Consejos de conciliación de distrito. Y la ley federal australiana establece un Tribunal federal de conciliación y arbitraje, compuesto, en principio, por un solo miembro, que es escogido por el Gobernador general entre los jueces del Tribunal supremo. El dicho Tribunal de conciliación, en el que pueden tener asiento dos asesores, conoce de los conflictos industriales que traspasan los límites de un Estado; puede enviar los asuntos que se le sometan ante un Comité temporal de conciliación, compuesto de un número igual de representantes de las dos partes interesadas, confiar las investigaciones y delegar sus poderes de conciliación en una jurisdicción industrial ó en un Consejo constituido *ad hoc*; conocer á instancia de parte ó de oficio, y sobre resolver los conflictos, declarar que toda práctica, disposición, regla, costumbre, cláusula de contrato colectivo, etc., será regla común de toda industria conexa con aquella en que el conflicto se ha producido.

La ley de Ginebra de 10 de Febrero de 1900, modificada en 26 de Marzo de 1904, entra en el grupo de las del arbitraje obligatorio. Tiene, según advierte Pic, el doble objeto de fijar la manera de establecer tarifas de uso entre obreros



y patronos, y de regular los conflictos colectivos, aunque no se refieran á salarios, é instituye, como la ley neo-zelandesa, la conciliación como base y el arbitraje obligatorio como último recurso. La tentativa de conciliación se verifica ante el Consejo de Estado, y en caso de no conciliación, la Comisión central de *prud-hommes* desempeña el oficio de Tribunal de arbitraje con adjuntos delegados de patronos y de obreros. La sentencia arbitral es ley para lo por venir. Las tarifas pueden ser establecidas por cinco años como máximo. Y se prohíben, bajo ciertas sanciones penales, las huelgas y los *lock-outs*.

\*  
\* \*

El relato que se acaba de hacer muestra que, pues en todas partes han sido creadas instituciones privadas y oficiales, se ha hecho caso omiso de las alegaciones contra las mismas. Y se explica.

Se ha dicho que por destinadas esas instituciones á prevenir y resolver diferencias colectivas entre patronos y obreros van á veces contra el consumidor ó el público en general, y también que, en último extremo, nada pueden lograr frente al imperio incontrastable de la ley de la oferta y la demanda; que tampoco pueden valer sin la disposición de ánimo de las clases interesadas para servirse de ellas, y que nunca alcanzarán la confianza de las partes bastante para que éstas las utilicen prefiriéndolas á huelgas, *lock-outs* y demás medios de lucha, sobre todo si se tiene en cuenta lo que los obreros han conseguido y pueden recabar por el empleo repetido de las huelgas; y en orden á las instituciones oficiales, además de lo expuesto, que entraña una ingerencia indebida del Estado en la esfera económica. Pero estos argumentos han sido victoriosamente refutados.

Se ha advertido que, en efecto, la unión de patronos y de



obreros crea una fuerza de que se puede abusar lo mismo que de cualquiera otra, pero que al abuso de que se habla se oponen múltiples circunstancias, y que de todas suertes es indudable que la lucha entre empresarios y trabajadores puede causar á todos mayores daños.

Alégase, asimismo, que no es exacto que el precio del trabajo sea fijado por la relación entre el número de trabajadores y el capital destinado á remunerarlos, pues conforme han demostrado Levasseur, Walker, Stanley y otros, los salarios no responden al capital ó fortuna del empresario, sino á la productividad del trabajo que han de remunerar, y, por otro lado, que en los fenómenos particulares sometidos á la ley de la oferta y la demanda influyen otros factores, por lo cual caben dificultades y abusos que la conciliación y el arbitraje pueden corregir.

Frente á la falta de disposición de ánimo para utilizar esos medios y á que por huelgas y *lock-outs* logren mayor provecho obreros y patronos, y especialmente los primeros, nótese, de una parte, que los conflictos á que con aquéllos se quiere poner remedio existen, llevan consigo de ordinario los males á que repetidamente se ha aludido y hasta perturbaban muchas veces la paz pública, y así como ha enseñado la experiencia que no bastan para evitarlos la restricción y aun la prohibición de las sociedades obreras, la proscripción del derecho de huelga y la represión violenta de esta última, también es un hecho que la libertad de coalición y la acción de las sociedades y sindicatos obreros tampoco han sido suficientes para pacificar la vida industrial; de otra parte, que si es verdad que la clase trabajadora ha obtenido por las huelgas positivas ventajas, no lo es menos que ha logrado otras por el empleo de los medios pacíficos ó amistosos de que se trata, y que las propias huelgas han dado muchas veces el resultado que se indica por haber concluído por acuerdos que la regulación anticipada de la conciliación y el arbitraje ha faci-





litado; además que, vistas y analizadas muchas de las causas de los conflictos á que se alude, no puede haber duda respecto de que los medios referidos son propios y adecuados para evitar y resolver pacíficamente esos conflictos, y hay que esperar que á tales medios se acudirá más cada día, y que si examinadas las cosas por el lado de las instituciones oficiales, es posible considerar, con Vermeersch, que se pecaría por inocencia y candidez fiando demasiado en las leyes que instituyen consejos, comisiones ó comités para hacer propaganda social, representar intereses y apaciguar conflictos y no viendo que el Estado no puede ser aquí más que el jardinero que planta, riega y cuida y que no puede haber fruto sin suelo propicio y sin sol y sobre todo sin que circule por el arbusto savia vivificadora, no por eso se ha de desconocer que, al cabo, los institutos indicados son de utilidad y, consiguientemente, recomendables.

Y en contra del criterio de que la constitución de las instituciones oficiales de que se acaba de hacer mérito implica una ingerencia indebida del Estado en el orden económico, criterio que, según es sabido, sustentan los economistas afiliados á la escuela de Manchester, para los cuales el remedio que con aquéllas se busca está en el libre desenvolvimiento de la propia vida económica y de las iniciativas particulares y el Estado, por cuanto su fin no es otro que el jurídico, debe dejar hacer y dejar pasar (*laissez faire, laissez passer*), que, por el contrario, aquél puede y debe intervenir, no de un modo ambicioso ó invasor, pero sí por principios de derecho y de justicia, y, cual viene á significar la frase de Stuard Mill de que la economía política se relaciona necesariamente en sus aplicaciones con numerosas ramas de la filosofía social, en razón á la compenetración entre los múltiples intereses sociales y entre los varios fines humanos, lo cual enseña los propósitos de armonía á que ha de obedecer; que tan debe intervenir en la forma indicada



cuanto que antes que el progreso de las ciencias sociales llegara á justificarla ya la realidad había impuesto esa intervención de su parte, y que si el Estado ha creado los institutos de referencia ha sido por demandarlo la realidad, que, entre otras cosas, ha puesto de relieve que hasta aquí, por unas ó por otras causas, ni las iniciativas particulares han extendido la conciliación y el arbitraje lo preciso, ni sus instituciones para la una y el otro han bastado para remediar los males sentidos y á que quisieron acudir.

Pero no prueban sólo los hechos y las leyes enunciados más arriba que en todas partes se ha tratado de aplicar, como medios para prevenir y resolver los conflictos colectivos entre patronos y obreros, el de la conciliación y el del arbitraje, sino, además, que, si en algún caso se han utilizado como sistemas independientes, en general se han aplicado ambos racionalmente combinados.

La tentativa de conciliación, ha dicho Mr. Fontaine, tiene por objeto acercar, aproximar á empresarios y trabajadores, disipar las malas inteligencias entre ellos por la discusión y facilitar á cada parte el conocimiento y la apreciación de los motivos de la conducta de la otra. Supone necesariamente el contacto de los interesados ó de mandatarios elegidos ó escogidos entre ellos, sin proscribir, sin embargo, la presencia de terceros conciliadores. Ó fracasa ó conduce á una convención, que, como resultado de un acuerdo directo, es aceptada sin dificultad.

El arbitraje, por el contrario, tiene por objeto cortar ó dirimir los puntos litigiosos por terceros no interesados en el conflicto que reciben el encargo de la libre elección de las partes y que son los árbitros. Estos reúnen todos los elementos para una decisión, que las partes están comprometidas de antemano, á lo menos moralmente, á aceptar.

De estas indicaciones se infiere que entre la conciliación y el arbitraje median diferencias importantes.



Por la primera se puede llegar á un convenio, bien manteniendo, bien modificando el estado de cosas en que sobreviene el conflicto; por el segundo, á una sentencia obligatoria ó con fuerza ejecutiva en principio, porque aquí hay que tener en cuenta que, según lo revela la definición anteriormente consignada, el arbitraje de que se trata, no es el reconocido por las leyes comunes, respecto del cual exigen éstas que los árbitros sean personas peritas en derecho, previenen que se lleve adelante bajo formas judiciales, iguales ó semejantes á las ordinarias y sometiendo, en su caso, el laudo á los recursos procedentes ante los tribunales oficiales dan á aquél el carácter de una sentencia pronunciada por éstos, sino un arbitraje en sentido más amplio y menos jurídico. Claro es que al poner las partes el negocio en manos de terceras personas para que le juzguen y resuelvan, quieren, inicialmente, que la sentencia sea obligatoria ó eficaz, mas bien se alcanza que, por la índole de los conflictos á que el arbitraje de referencia se aplica y por el objeto de éste, puede ocurrir en la práctica que el laudo no sea aceptado ó que por una de las partes ó por ambas no se cumpla ó no se gestione el cumplimiento.

Es, en segundo término, diferencia que salta á la vista que la conciliación puede tener lugar entre los patronos y los obreros solos y que siempre, aunque intervengan terceros conciliadores, son los mismos interesados los que deciden, mientras que el arbitraje supone la mediación de extraños, llamados á estudiar y examinar por sí mismos el negocio y á ponerle término por un laudo ó sentencia.

Además, es indudable que, según expresan la mayor parte de los tratadistas que han escrito sobre el particular, el papel moral y pacificador del procedimiento conciliatorio, en las cuestiones ó conflictos entre obreros y patronos, es muy superior al del arbitraje. La conciliación, dice á este propósito un autor, ya citado, no sólo puede apaciguar conflictos ya



nacidos por concesiones recíprocas, sino prevenirlos, regular desde luego las condiciones futuras del trabajo, desvanecer con antelación todos los puntos que puedan producir dificultades. El arbitraje no sirve para este efecto; no se concibe sino para un conflicto nacido, bien preciso y determinado. Es más, el procedimiento de éste supone trámites de defensa, esfuerzos por cada parte para convencer al árbitro de su razón, y por añadidura no pone en contacto á patronos y obreros si no es colocándoles en situación de adversarios. La conciliación, al evitar las huelgas, no desvanece solamente las consecuencias materiales y morales de las mismas, sino que, al propio tiempo, ataca á sus causas, es decir, á la falta de ocasión para el obrero de dar su parecer, á la del contacto entre el patrono y el trabajador, y al antagonismo que de esto resulta entre el uno y el otro. Ya ha habido ocasión de consignar palabras muy expresivas sobre la trascendencia de los procedimientos conciliatorios en las relaciones entre las clases patronal y obrera, y de transcribir son aquí las siguientes frases de Mr. Waterlot: «no se puede sino preconizar estos Consejos de conciliación, en los cuales patronos y obreros hallan ocasión de verse y de explicarse mutuamente sus reclamaciones y deseos. Este trato diario puede, por sí solo, disipar todas las desconfianzas, hacer nacer sentimientos de estimación recíproca. Los patronos pueden advertir cuáles son las condiciones precarias de existencia de sus colaboradores de fábrica ó taller, pueden apreciar la vida mísera de éstos y comprender el fundamento de sus reclamaciones. Por lo que hace á los obreros, constituyen el medio más directo de proveer á su educación económica. Á la hora actual sus prejuicios no les permiten hacerse cargo de las leyes imperiosas de la concurrencia industrial; aquel que espera el producto fuera de la fábrica no les inquieta casi, y es preciso enseñarles las dificultades que hay que vencer, los peligros que hay que evitar, y que en ciertos mo-





mentos precisa hacer concesiones y hasta realizar sacrificios.»

Y por otro lado, mientras la conciliación se puede emplear para toda clase de conflictos, el arbitraje no. «Los dos sistemas, ha dicho Crompton, difieren todavía en que el arbitraje no se puede aplicar más que á las cuestiones industriales más vastas y generales, mientras que un Consejo de conciliación se ocupa en los más pequeños detalles de la vida industrial.» Y según Mr. Fontaine, en tanto que una discusión en un Consejo de conciliación se podrá producir siempre útilmente, aunque apenas se relacione con el contrato de trabajo ó con las condiciones de éste en el interior de la fábrica, hasta la posibilidad de arbitrar depende estrechamente de la determinación de las cuestiones, porque es indispensable que la decisión arbitral descansa sobre hechos y principios, pues falto de estas bases, el árbitro no puede hacer más que *partir la pera en dos*, y porque en el arbitraje se ha de tratar de interpretar reglas, de comparar situaciones, de decidir sobre la realidad de los hechos explícita ó implícitamente invocados por una y otra parte. Y fácil es advertir que, con arreglo á todo lo expuesto, por doquiera se ha ordenado el empleo de la conciliación y el del arbitraje para los casos en que aquélla no se ha podido lograr.

Y, por fin, revelan las leyes y los hechos en su lugar indicados que, en general, se ha tendido á la constitución de organismos permanentes para las dos funciones conciliadora y arbitral, y que si bien en la determinación y organización de dichos institutos se han seguido criterios diferentes ha sido, en lo fundamental de las variaciones, persiguiendo el arraigo y la mayor utilidad y eficacia de los mismos institutos citados.

Según indica Mr. Camille Briffaut en su obra «Las naciones hacia la paz», vistas las instituciones establecidas, se puede hacer mérito de tres organizaciones diferentes, á saber: la del Consejo profesional; la del Consejo de la industria teniendo por base la región, y la de la Cámara del trabajo.



Con respecto á la primera son de considerar como notas: la de responder á la diversidad de industrias, y por tanto, la de darse en concreto para cada una de ellas; la de contar en primer término con un organismo ó Consejo en cada fábrica, con secciones correspondientes á los distintos oficios que trabajan en el establecimiento, entendiendo estas secciones en lo peculiar de cada oficio y el Consejo de fábrica en cuanto afecta á varias secciones ó á toda la explotación; la de que haya un Consejo profesional para la región, es decir, para cada una de las industrias que en ésta radican, con competencia para conocer de aquello que los consejos de fábrica no hayan logrado resolver ó de las cuestiones que afectan á más de un establecimiento, y la de que si en este Consejo no se logra la conciliación, quepa someter el asunto á la decisión de árbitros, pudiendo actuar aquél como tribunal arbitral, ó que el negocio pase á un tribunal nacional profesional de arbitraje.

Asimismo, vienen á ser notas de la organización citada en segundo lugar la de referirse á las industrias de una región y á veces de un Estado acumulativamente, y la de no ofrecer más que un organismo, que es el propio Consejo regional ó nacional en su caso. Además, este Consejo, por estar á mayor distancia del medio en que se producen los conflictos, se suele utilizar más para el arbitraje que para la conciliación.

Por último, la tercera organización se puede considerar como una combinación de las dos anteriores, y ofrece los caracteres de ser de iniciativa oficial y de ser regional, aunque, por la manera de constituirse las secciones de la Cámara de trabajo, no sin cierto aspecto profesional.

Y no es difícil hacerse cargo del porqué de estas tres organizaciones, dado el propósito, ya indicado y que era natural se tratase de realizar, de afianzar los institutos á que se alude y de hacerlos útiles y eficaces en el mayor grado posible.

De la primera se puede decir que responde á dos ideas capitales: la de que para los conflictos que puedan surgir en



el seno de las explotaciones ó de los establecimientos industriales en razón á la condición y á la vida propias de cada uno de ellos, haya órganos para conciliar los intereses contrapuestos, y la de que así para esos conflictos como para los demás que en cualquier oficio ó profesión se puedan promover haya representaciones del mismo oficio ó de la misma profesión tanto para la conciliación como para el arbitraje en su caso. Y es claro que esta segunda idea sirviendo para aplicar y desenvolver la primera. De modo que se trata de un régimen esencialmente preventivo y completamente profesional, caracteres que, según enseña lo manifestado, han sido considerados ordinariamente y por múltiples razones como los que, en rigor, deben ofrecer las instituciones de referencia.

El segundo sistema ó del Consejo regional sin distinción de industrias es, seguramente, hijo de las dificultades que en la práctica se han podido oponer al desarrollo de las instituciones genuinamente profesionales, del vario desenvolvimiento de las diferentes industrias en las diversas regiones ó comarcas de cada país y aun dentro de cada una de ellas, y, por otra parte, de la idea de que basta para juzgar de los conflictos entre patronos y obreros, ó por lo menos de la mayor parte, de una técnica relativa, del conocimiento de las exigencias generales de la industria, costumbres, usos, etc.; tanto más cuanto que en las ocasiones en que pueda haber precisión de nociones más específicas los jueces se pueden valer de peritos, y aun quizás la de que por lo mismo que la aptitud á exigir es esa y la del espíritu de equidad de que deben hallarse revestidos los llamados á conciliar ó dirimir las diferencias de que se trata, las instituciones formadas con arreglo á lo expuesto ofrecen mayores garantías todavía que las estrictamente profesionales, en las que puede ser más viva y más tenaz la oposición entre los representantes de patronos y de obreros. Y pudiera agregarse que responde también á la idea de que sirve más para solucionar los conflictos que pue-



dan surgir en la pequeña industria, en la que, según dice un escritor italiano, por la escasa organización obrera y por el ambiente que en aquélla se respira, pueden los patronos abusar con mayor frecuencia, y convienen instituciones un tanto extrañas á la vida de los oficios.

Y el último sistema, el de la Cámara de trabajo, á que en él los institutos de conciliación y de arbitraje son parte de una organización más vasta, dada para velar, desde diversos puntos de vista, por la buena marcha de la vida del trabajo y por la inteligencia y la armonía entre las clases patronal y obrera. En su virtud, y por consideraciones que es fácil calcular, se estima que en este régimen tienen que resultar más aptas y mejores las instituciones que se examinan.

Y no hay que decir que según los pueblos así ha parecido también preferible el empleo de uno ó de otro sistema.

Pero aquí ya parece de necesidad advertir que, analizando detenidamente las cosas, cabe sostener que los principios capitales, aquellos de que se debe partir, son los que constituyen la base ó cimiento de la organización citada en primer lugar. En suma, y tal cual lo acredita la experiencia, los conflictos se producen dentro de cada establecimiento, y en general en un oficio de los que en él trabajan, y de comprender á más de una explotación, en el seno de los oficios. Para el primer caso las correspondientes secciones de los Consejos de fábrica y estos Consejos son, en verdad, de la mayor conveniencia, por no decir indispensables, é insustituibles. Para el segundo nada puede haber más apropiado que el Consejo profesional. Y para la adopción de estas instituciones no puede haber en la práctica obstáculos insuperables, á no ser en casos excepcionales, únicos que para proveer de otro modo habría que tomar en cuenta.

Con independencia de lo consignado, las leyes, ora han dejado á la voluntad de los interesados la tentativa de conciliación, ora de una ó de otra manera han hecho dicha ten-



tativa obligatoria. Pero la tendencia á esta última es indubitante.

Salta á la vista lo antagónico de que, tratándose de conciliación, se imponga una obligación, aunque ésta se halle reducida á la de intentar aquélla. No es, á la vez, de olvidar que tal imposición pugna bastante con el régimen de instituciones profesionales, necesitadas para arraigar del amor y de la confianza de los del oficio, y que, según queda expuesto, son las que más conviene extender. Y es por todo extremo dudoso que, dadas las circunstancias que alejan á obreros y patronos del procedimiento conciliatorio, se pueda contar con obtener por la tentativa obligatoria algo positivo y práctico. Lo que acontece á la hora actual en España es buena prueba de ello.

Mas también es incontrovertible que obreros y patronos, en muchos países al menos, huyen, á menudo, de acudir á los conciliadores, y que al oportuno empleo del procedimiento de conciliación se opone el espíritu despótico con que frecuentemente se formulan las aspiraciones causa de los conflictos. No cabe negar tampoco que hasta que los de una y los de otra clase social se vean libres de los prejuicios, de los recelos y de las desconfianzas que á la presente suelen nublar sus ojos y desviar su voluntad del buen camino, hasta que la pasión ceda su plaza al juicio sereno y reposado, hasta que la educación industrial sea más perfecta, los casos de deserción, dejado todo á la iniciativa y á la voluntad de las partes, serán por desgracia muy numerosos. El procedimiento conciliatorio, por otro lado, no puede perjudicar en momento alguno á los que le sigan; se da por y para su bien, y por lo mismo es un método, un sistema que la Sociedad, hondamente perturbada en su marcha por los conflictos obrero-patronales, tiene razón para exigir. Y todo ello basta para explicar y aun para justificar la tentativa obligatoria objeto de estas líneas.

Como en orden á la expresada tentativa hay, según se ha



podido observar, indicaciones legales en favor del que se denomina arbitraje facultativo-obligatorio, ó sea de que una vez celebrado voluntariamente el compromiso, una vez empleado voluntariamente el arbitraje por las partes, se tenga á éstas por obligadas, bajo las sanciones convenientes, al cumplimiento del laudo ó sentencia arbitral. Los fundamentos de esta doctrina no se pueden ocultar á nadie. Los contratos son leyes, y como leyes deben de ser cumplidos. El oficio del árbitro, como el del juez, merece singular respeto. Y tampoco puede extrañar que se trate de llevar dicha doctrina á la práctica. Lo que hay es que los obstáculos para hacer efectivas las sanciones no son fáciles de vencer, y los legisladores, para no desprestigiar su obra, tienen que proceder con prudencia.

Y por último, conforme acreditan algunas de las leyes en su lugar citadas, hasta se ha llegado á establecer el arbitraje del todo obligatorio ú obligatorio por antonomasia, que es aquel en que la ley obliga á la comparecencia ante los árbitros como ante un tribunal ordinario y sujeta también á las partes, con multas y otras sanciones, á cumplir la sentencia.

Mas á nadie puede sorprender que este arbitraje se haya extendido poco, ni que en las controversias acerca del mismo pesen menos los argumentos de sus defensores que los de sus adversarios.

Los argumentos capitales que se suelen emplear en favor son: el del interés general grandemente alterado por los paros, incompatibles con él, y los cuales, por tanto, evita, el del interés particular del obrero, que precisamente por hacer el arbitraje en cuestión inútiles las huelgas no sufre los perjuicios que éstas le suelen ocasionar y el fracaso de las legislaciones que han reglamentado el arbitraje facultativo. Además se suele alegar que en Nueva Zelanda y los demás puntos en que ha sido aplicado ha producido excelentes resultados.





Á su vez, el primer argumento se expone con algunas variantes. Unos invocando, por un lado, los males que causan las paralizaciones del trabajo, sobre todo á las explotaciones no interesadas directamente en los conflictos, estiman, por otro, que éstos tienen que ser mucho mayores y más graves desde el momento en que, desenvueltas las asociaciones obreras, se libren verdaderas batallas alrededor de los contratos colectivos de trabajo; y con Mr. Jaffé dicen que si por una más perfecta organización de patronos y trabajadores, se llega á dar una base sólida á la formación de los contratos colectivos de trabajo, parece conforme al interés de la Sociedad adoptar las medidas indispensables para disminuir perturbaciones tan graves como las huelgas y los *lock-outs*, y que para ello son precisos tribunales ú oficinas competentes de arbitraje á quienes necesariamente se hayan de dirigir las partes en litigio.

Y otros, inspirados en ideas socialistas, van más lejos. Basan el derecho del Estado á intervenir en la idea de que es el verdadero propietario de la industria, de la que suponen que el industrial no es más que un depositario. Las industrias, dice Lloyd, no son creaciones individuales, no se constituyen para el solo provecho de patronos y obreros; son una creación social sometida á la intervención de la Sociedad. Se conservan por la cooperación de todo el pueblo por diferentes medios, de los cuales no es el menor el de la mediación del Estado.

Pero no hay que decir que frente á los argumentos de que se acaba de dar cuenta se formulan muchos y muy poderosos. El sentido socialista con que, según se ha visto, se pretende justificar el arbitraje obligatorio, está contradicho por las doctrinas favorables á la propiedad individual. Y muy luego se advierte que con el arbitraje obligatorio se sacrifica la libertad del trabajo, se condena el derecho de huelga y se substituye por la del Estado la iniciativa de los patronos en la



dirección de sus negocios y la de los obreros en la apreciación de sus necesidades.

Además, por lo que hace al fracaso que se supone é invoca de las leyes sobre conciliación y sobre arbitraje no obligatorio, nótese que, conforme viene á revelarlo cuanto más arriba se ha dicho, no hay en rigor tal fracaso y se puede tener por seguro que, al cabo, introduciendo las mejoras que un atento estudio de las cosas y las enseñanzas de la experiencia pueden aconsejar, las iniciativas particulares y oficiales lograrán por entero el resultado apetecido. Por cierto que, á este propósito, ha sido advertido por diferentes escritores que los partidarios del arbitraje obligatorio hablan solamente de la legislación sobre conciliación y arbitraje facultativo ó no obligatorio, prescindiendo en absoluto de las iniciativas privadas, que tanto y tanto pueden contribuir á resolver el problema.

Y, últimamente, analízanse las leyes de arbitraje obligatorio y la práctica de éste en los países que le han establecido y se hace notar que, tras un análisis severo é imparcial, no se puede proclamar el resultado favorable que los defensores del sistema le atribuyen, y, además, que sería sumamente difícil aplicarle en países más industriales y de intereses más complejos que aquellos en que se ha aplicado. De Suiza, por ejemplo, se observa que el allí establecido ha funcionado pocas veces y no con fortuna, y con respecto á Nueva Zelanda, considerada por muchos como «el paraíso de los obreros», dícese, según se puede apreciar en el libro de Bertrand Nogaro, que si bien allí resulta tolerable no es sino por las condiciones especiales del país, extenso, rico, poco poblado y poco industrial, y por el aislamiento mercantil en que ese país vive, que ha permitido á los patronos fijar libremente los precios en el mercado interior, resarciéndose así del alza de los salarios por los obreros conseguida.

Y en tal punto las cosas, evidente es que, en general, merecen aplauso los esfuerzos hechos hasta aquí por las inicia-



tivas particulares y por las oficiales, sin que á pesar de no ser todos verdaderamente justificados ni hallarse algunos inspirados en los mejores principios, pueda extrañar la diversidad de métodos y procedimientos por ellos adoptados.

Mas, para concluir la exposición de cuanto acerca de dichas instituciones conviene indicar, precisa llamar la atención sobre un extremo de interés, advirtiéndolo, desde luego, que el desenvolvimiento de ciertos factores, que ya influyen y todavía pueden influir más en la vida del trabajo, puede facilitar mucho la constitución de los referidos institutos en condiciones ventajosas y los resultados favorables de los mismos.

Es bien conocido que la coalición y la asociación obreras han sido consideradas un tiempo como ilícitas, hallándose prohibidas por leyes positivas. En Inglaterra, por ejemplo, no han venido á ser permitidas, en general, hasta 1824, y en Francia hasta 1864, por lo que hace á la coalición, tenida hasta entonces por delito, y hasta 1884, en que se dictó la ley de Sindicatos, por lo que á la asociación obrera respecta. Y es claro que la prohibición entrañaba desconocimiento, no sólo de la personalidad de la asociación obrera, sino, además, de la conveniencia de la misma para tratar y contratar sobre las condiciones del trabajo.

Reconocidas la licitud y la legalidad de las referidas asociaciones, éstas, aunque en algunos casos, según lo demuestra la historia del trade-unionismo en Inglaterra, se han dado cuenta de su misión, y por ello han procurado afirmar su personalidad para contratar, con lamentable frecuencia han amparado demandas injustificadas, multiplicado los conflictos y adquirido caracteres políticos y, á veces, revolucionarios. Y tampoco, en su virtud, han contribuído, como habría sido de desear, á mejorar la contratación con los patronos.

No hay que decir que poco desarrollada también, por no haberse desenvuelto lo conveniente la obrera, la asociación patronal, la contratación de referencia ha carecido asimismo,



por este otro lado, de un órgano ó elemento del mayor valor.

Y ha sido tarde, se puede decir, con las salvedades debidas, que casi en estos tiempos, cuando se ha adquirido la noción clara de lo que en la contratación tantas veces citada y con ella pueden hacer ó realizar unas y otras asociaciones.

A su vez, los estudios rigurosos sobre la naturaleza, condiciones y efectos del que se llama contrato colectivo de trabajo, son de estos días. Y es ahora cuando se ha empezado á precisar las cláusulas capitales del mismo, y cuáles pueden ser las responsabilidades de los contratantes y el modo de hacerlas efectivas, extremos estos últimos que basta leer el libro de Claes sobre la vida del dicho contrato en Alemania, ó lo que en ese libro se dice en orden á las Asociaciones y Sindicatos contratantes sobre la teoría de la representación, la de la asociación y la combinada, para advertir que aún están, en no pequeña parte, por dilucidar.

Hasta aquí, pues, la influencia de las ideas sobre asociaciones obreras y patronales, y sobre el contrato colectivo de trabajo no ha podido ser tan grande en la vida de las instituciones para prevenir ó resolver los conflictos de que tantas veces se ha hecho mérito como es de creer lo será en adelante.

Y, conforme se ha dicho, puede acontecer que, si al cabo se afirma la intervención de las asociaciones de patronos y de obreros en los contratos de trabajo, y si así, y en vista de lo que pueden influir en la pacificación de las relaciones industriales, se multiplican y concluyen los colectivos convenientemente, haya nuevos é importantes elementos para desenvolver, de la mejor manera, el régimen de la conciliación y del arbitraje. Ya se indica que ha de ser á modo de cláusula fundamental del contrato colectivo la de prever los conflictos y el método para resolverlos. Y si es así la iniciativa privada podrá desplegar más sus alas y rendir ópimos frutos.

\*  
\* \*



Y ahora fijemos nuestra atención en las instituciones objeto de nuestro estudio en su relación con los conflictos individuales, de que sólo por incidencia hemos hablado hasta aquí.

A la vez que conflictos colectivos, puede haber y hay, entre patronos y obreros, conflictos ó contiendas individuales. Y por ello, así como por haberse entendido que mientras los primeros se refieren, en puridad, á aspiraciones, á compromisos ó contratos futuros, los segundos se contraen á relaciones preestablecidas ó sea al cumplimiento ó incumplimiento de un contrato anterior, ó bien que en los primeros predomina el carácter económico y en los segundos el jurídico, también ha habido, en lo que á estos conflictos respecta, disposiciones varias.

En razón á lo expuesto y á tal fin, hasta se ha llegado á crear los llamados Consejos de *prud-hommes*, colegios de *probiviri* ó tribunales industriales, instituciones más jurídicas, si se quiere, que los Consejos de conciliación y arbitraje.

Y esto impone algunas consideraciones sobre estas instituciones especiales.

Basta con la enunciación que se acaba de hacer de las mismas para advertir que con ellas se ha venido á constituir una verdadera jurisdicción especial. Y este hecho trae á la memoria y despierta en la mente algunas ideas.

Se ha hablado alguna vez de que, conforme defienden los mercantilistas que el derecho mercantil es una rama especial del privado, se podría considerar y defender que deben ser tenidos por otros tantos órdenes jurídicos especiales dentro del privado los correspondientes á las industrias agrícola y fabril. Una de las razones por las cuales se ha enunciado esta tesis ha sido la de creer, cual los mercantilistas respecto de la jurisdicción especial de comercio, en la necesidad de otras jurisdicciones especiales para los asuntos agrícolas y fabriles. Y ante la constitución de la jurisdicción á que se ha aludido



que, refiriéndose á las cuestiones entre patronos y obreros, se refiere, sin duda, á cuestiones industriales que no son las mercantiles, parece ha lugar á pensar que el hecho expresado responde al reconocimiento de la especialidad, en el campo del derecho privado, de los indicados órdenes jurídicos agrícola y fabril, y al de que, por lo menos algunas de sus reglas ó algunas de las cuestiones que en la aplicación práctica de sus preceptos puedan surgir, requieren la determinación, para en su caso, de diversos tribunales especiales.

En favor de esta tesis se puede observar que, establecidas hasta aquí las instituciones todas ideadas para prevenir ó resolver los conflictos colectivos ó individuales entre patronos y obreros sin mirar apenas á los que pueda haber entre los patronos y obreros agrícolas, si de un lado cabe estimar esta circunstancia como reveladora de no haberse puesto el pensamiento al crear aquéllas en la especialidad de los dos órdenes jurídicos de que queda hecho mérito, el agrícola y el fabril, pues parece que de haber pensado en ambos se habría hecho la oportuna división, se puede entender por otro lado que arguye el reconocimiento de uno y otro orden, y que ha sido precisamente por eso y por no exigirlas en la práctica con tanto apremio la vida agrícola por lo que no se han estatuido las precitadas instituciones en particular relación con la misma. Se puede agregar, además, que cada día se acentúa la tendencia á crear una jurisdicción especial para el conocimiento de los conflictos individuales entre patronos y obreros agrícolas. Y también que, por una parte, se ha pensado en una jurisdicción especial para el conocimiento de las cuestiones referentes á marcas de fábrica, nombres comerciales, etc., y por otra, ha habido pretensiones á la institución de otra jurisdicción especial para el de las cuestiones derivadas del contrato de aparcería. No hace mucho fué presentado al Parlamento español un proyecto de ley sobre jurados especiales



para conocer de las cuestiones referentes á marcas de fábrica y demás á que se acaba de aludir, y al discutirse nuestra vigente ley de tribunales industriales, el ilustrado diputado Sr. Zulue-ta pretendía se proveyera á fin de que conociesen tribunales especiales de las cuestiones á que se ha aludido derivadas del contrato de aparcería y muy singularmente de las de los *rabassaires* catalanes.

Y como quiera que también se habla de un derecho industrial especial, distinto del civil y del mercantil, en el terreno del derecho privado, y de las diversas ramas que hasta aquí se ha entendido le integran en el del derecho público, ha lugar, igualmente, á imaginar que la constitución de los organismos establecidos por modo singular para la tramitación y resolución de los conflictos individuales entre patronos y obreros, significa el reconocimiento de aquel orden jurídico y la afirmación de que pide y requiere el planteamiento de jurisdicciones especiales en relación con las diversas cuestiones que, en su esfera ó en razón á sus reglas, puedan surgir. Á dar fuerza á esta tesis podrían contribuir algunas de las indicaciones anteriormente consignadas ó algunos de los hechos referidos, tales como el de haberse creado las múltiples instituciones de que venimos tratando en relación con los diferentes conflictos entre patronos y trabajadores, y el de haberse pensado en atribuir á tribunales especiales el conocimiento de los negocios referentes á las marcas de fábrica y demás signos semejantes de la propiedad industrial.

Pero no; en verdad, no cabe acoger ninguna de las ideas expuestas.

Hay que descartar, desde luego, algunas de las suposiciones particulares apuntadas. Si es cierto que las diversas instituciones para la prevención y resolución de los conflictos entre patronos y obreros han sido establecidas sin mirar apenas los entre patronos y obreros agrícolas, tal hecho ha obedecido sin duda á que por las diferencias entre la vida del



trabajo en la mina, la fábrica, el taller ó el despacho mercantil y esa misma vida en el campo, ha sido en el seno de aquellos establecimientos donde los conflictos entre empresarios y obreros se han multiplicado, adquiriendo la gravedad que ha obligado á pensar concreta y particularmente en ellos. Y la idea de constituir tribunales especiales para el conocimiento de los conflictos individuales entre patronos y obreros agrícolas no responde tampoco á la consideración de un derecho agrícola con independencia del fabril y del mercantil sino, sencillamente, á las propias diferencias á que se acaba de aludir, que separan el trabajo del campo del de las otras industrias, explicándose así, por un lado, que legislaciones que empezaron refiriéndose sólo á los patronos y trabajadores manufactureros se hayan referido luego á éstos, á los del comercio y aun á otros asimilables á ellos, y por otro, que se trate de fundar para los agrícolas instituciones especiales separándolas de todas las demás.

Y hay que notar, finalmente, que aún están en pie doctrinas importantísimas que no permiten aceptar ninguno de los supuestos de que se ha hecho mención.

Definido el derecho privado, de acuerdo con el criterio romano, y según puede verse en Savigney, como aquel que contiene todas las relaciones jurídicas entre particulares y es la regla y la expresión de estas relaciones, y definido el derecho civil ni más ni menos que como el que rige las relaciones entre particulares, derecho privado y derecho civil vienen siendo tenidos por muchos como uno mismo; por donde se dice que el civil es el único que frente al derecho público hay que considerar.

Aunque se puede poner enfrente de esta doctrina la de los mercantilistas, que, según se ha dicho, ven en el mercantil una rama del derecho privado substantiva é independiente, ni siquiera este juicio resulta favorable á la consideración de otras ramas de derecho privado industrial ó de un derecho





de esta índole diverso del civil y del mercantil pues, en sentir de los mercantilistas, lo que obliga á distinguir el derecho comercial del civil es la naturaleza del acto de comercio del que no se puede dejar de derivar una relación de hombre á hombre y, en su virtud, una determinada relación jurídica, y de estas cosas no cabe hablar en orden á las otras industrias distintas de la mercantil.

Y en lo que hace al derecho industrial, mezcla de reglas de derecho privado y de derecho público, es evidente que la diversidad y la heterogeneidad de las materias, y la consiguiente variedad de substancia y de contenido de los principios y reglas que se entiende le integran, se oponen á que se tenga por un orden jurídico de exigencias siempre distintas de las de cualesquiera otros órdenes y esto, no obstante, con diversos grupos de ellas ante los que fueran indispensables jurisdicciones ó tribunales especiales varios. Sin embargo, según es fácil de advertir, la admisión del derecho industrial y de las jurisdicciones industriales especiales en los términos referidos, descansaría en fundamentos más aceptables que aquellos que se alegan y cabe exponer abogando por las ramas de derecho privado industrial de que se ha hecho mérito.

Mas sí parece que la jurisdicción especial de que se trata presupone el reconocimiento de la existencia como rama particular del que muchos llaman derecho del trabajo, y que es la singularidad de este orden jurídico la que ha llevado y lleva á establecer esa jurisdicción, ora sin distinguir entre lo no agrícola y lo agrícola, ora separando una y otra esfera.

El trabajo de referencia es el que se podría llamar, empleando una frase consignada en el artículo primero del proyecto de ley sobre el contrato de trabajo que no ha mucho fué presentado á nuestro Parlamento, el de carácter económico, el de ejecución aplicado á la producción económica.



Ofrece por tanto ciertos caracteres que le distancian de los demás, y, sin duda, exigencias particulares. Y pensando en los que le prestan, en los que singular ó particularmente reciben el nombre de trabajadores ú obreros y en las relaciones entre aquellos á quienes el dicho trabajo es rendido, ó sea los patronos, y los propios obreros, y hasta en las especiales que entre éstos por razón de ese trabajo puede haber, se estima indispensable una regulación jurídica especial.

Y es de creer que ha sido bajo la idea de que por ello resultan las cuestiones que las relaciones expresadas pueden originar especiales y diversas de cualesquiera otras como se ha llegado á establecer la jurisdicción especial de que aquí se trata.

Sea esto ó no (y ante lo manifestado precisa insistir en que así es), no hay que decir que el establecimiento de esa jurisdicción suscita una vez más la debatida cuestión de las jurisdicciones especiales. Se puede preguntar si, aun dada la existencia de un derecho del trabajo como orden jurídico particular, ó la singularidad de las relaciones en razón al trabajo de que se ha hecho mención, ha lugar á considerar las cuestiones ó contiendas individuales de la misma derivadas tan diferentes á las de que conocen los tribunales ordinarios que exijan la constitución de tribunales especiales.

Y es claro que, en contra de la jurisdicción enunciada, se podría traer á colación cuanto repetidamente se ha expuesto sobre la conveniencia de la unidad jurisdiccional como correspondiente á la uniformidad de la legislación y á la uniformidad en la aplicación de las leyes indispensables para el bien público, ó los argumentos, de positiva valía, formulados por Meyer y otros en contra de la jurisdicción mercantil y de las demás jurisdicciones industriales, incluso las determinadas para conocer de los litigios entre patronos y obreros, y para las contiendas que en la vida del trabajo pueda haber entre trabajadores.



Pero no es posible negar que se ha tratado de acudir á conflictos que en la época actual ofrecen una fisonomía y un carácter especiales. Tan es así que por eso, á no dudarlo, aun distinguiendo los colectivos de los individuales, se ha encomendado muchas veces á unas mismas entidades el conocimiento de los unos y los otros. Y nadie niega que entre ambas clases de conflictos tiene que haber y media estrecha y singular relación. Y si es defendible que, no obstante lo alegado en favor de la unidad de la jurisdicción, cabe que en ciertos casos se instituyan jurisdicciones especiales, y que, sin embargo de lo dicho en contra de las jurisdicciones industriales, cabe, igualmente, que en relación con determinadas cuestiones se establezca tal cual jurisdicción industrial, por seguro se puede tener que el de que se trata es uno de los casos de excepción más claros y precisos. No se puede dejar de reconocer en la jurisdicción de referencia el carácter de profesional; y por aquello que han acreditado los estudios de Summer Maine y otros de que es á modo de ley histórica que los órganos de justicia lo sean de formación de derecho ó de legislación positiva hasta el momento en que ya se puede desplegar la acción legislativa, que está recomendada por la serie de costumbres y de usos y la falta de definiciones legislativas bajo los cuales se desarrollan actualmente las relaciones á que el trabajo obrero da lugar, estado que requiere un órgano de derecho pretorio adecuado, que sólo pueden constituir tribunales ó jueces conocedores de la vida industrial en la esfera de que aquí se hace mérito. Y lo que es más, que hasta viene á ser medio ó instrumento para afirmar el consorcio indispensable y la obligada comunidad de vida entre obreros y patronos, dos clases de personas determinadas que por su concurrencia á la producción económica forman en junto una hueste ó categoría especial.

Y lo manifestado pone de relieve el verdadero sentido y el justo valor de las instituciones á que al presente se alude



en particular. Pero á fin de dar á conocer, siquiera no sea más que á grandes rasgos, cuanto en orden á las mismas importa tener en cuenta, aún son de agregar algunas indicaciones.

Por representar y haber de ejercer la jurisdicción de que queda hecho mérito, han sido ordenadas, de acuerdo con el plan que se suele seguir para las demás jurisdicciones especiales en materia civil en relación con los tribunales ordinarios. Según la ley alemana sobre los industriales, de la apelación contra las decisiones de éstos conocen los respectivos tribunales regionales, y los ordinarios, en general, deberán prestar á aquéllos el auxilio que necesitaren. Conforme á la ley austriaca, de la apelación contra las resoluciones de los tribunales industriales ha de conocer el tribunal de primera instancia. La ley francesa, que, como la belga, atribuía antes las apelaciones de los fallos de los *prud-hommes* á los tribunales de comercio, se las atribuye ahora á los civiles. Y en España, donde la vigente ley de tribunales industriales, dando á éstos en cierto sentido mayor independencia, somete el conocimiento de las apelaciones de los que fallan en primer término á los que denomina plenos, compuestos por siete jurados y dos suplentes patronos, y siete jurados y dos suplentes obreros, presididos por el Juez, es de notar que, según es sabido, en todo caso el Juez de primera instancia es el presidente, y que, además, del recurso de nulidad, que es procedente siempre que en cualquiera de las dos instancias se hubiere incurrido en alguno de los defectos que señala el artículo 30, han de conocer las Salas de lo civil de las Audiencias territoriales respectivas.

No deja de haber en las legislaciones positivas variaciones de interés en orden á la creación, de hecho, de los tribunales de que se trata. Ampliando los datos consignados en otro lugar es aquí de hacer constar que en Alemania se crean por disposición de la autoridad municipal, aprobada por la autoridad administrativa superior y previa consulta á los obreros





y patronos de las principales ramas de industrias y establecimientos industriales del distrito, en número conveniente, y así como puede crearse un solo tribunal común á varios Ayuntamientos que al efecto se pongan de acuerdo y dicten reglamentos locales concordantes, la competencia territorial puede limitarse á partes determinadas de la circunscripción de los Ayuntamientos ó ampliarse por la Autoridad central del Estado; en Austria se crean por decreto del Ministro de Justicia, de acuerdo con los Ministros de los demás departamentos á los que la medida pueda interesar, allí donde dichos Ministros lo estiman necesario, y donde los proponen los Municipios, Cámaras de comercio y de la industria, Sociedades cooperativas ú otras Corporaciones industriales análogas; en Bélgica, en virtud de una ley que fija su correspondiente circunscripción; en Francia, con arreglo al artículo 2.º de la ley de 27 de Marzo de 1907, mediante decretos expedidos en forma de reglamentos administrativos, á propuesta de los Ministros de Justicia y de Trabajo, después de oír el parecer de las Cámaras de comercio y las consultivas de artes y manufacturas y de los Ayuntamientos interesados, en aquellas ciudades en que la importancia de la industria ó del comercio demuestra la necesidad de los mismos, ó cuando lo solicita el Ayuntamiento del lugar donde haya de establecerse con dictamen favorable de las Cámaras citadas, el Consejo general del Departamento y del ó de los Consejos de distrito de la región indicada y de la mayoría de los Ayuntamientos que deben formar la circunscripción en proyecto; en Italia, por Real Decreto, á propuesta de los Ministros de Gracia y Justicia, y de Agricultura, Industria y Comercio, y por iniciativa de las Cámaras de comercio, Sociedades obreras y Consejos municipales de la circunscripción, siendo de advertir que el Real Decreto determina la industria ó industrias para las cuales se crea el Colegio, su residencia, su circunscripción y el número de sus vocales, y en España, por el ar-



título primero de la ley, hállese autorizado el Gobierno para decretar el establecimiento de un tribunal industrial en la cabeza de un partido judicial, con jurisdicción sobre todo el territorio del partido, siempre que lo estime oportuno (ya ha habido ocasión de advertir que por Real Decreto de 20 de Octubre de 1908 se mandó fueran establecidos en los partidos en el mismo decreto citados), y á petición de obreros y patronos del mismo territorio.

Inspiradas las leyes en ciertos principios que pueden ser tenidos por elementales han dispuesto que los tribunales á que se alude estén compuestos por personas pertenecientes á las clases interesadas y elegidas por éstas; mas como es fácil de comprender, también son de apreciar en este punto variantes de interés, ya en lo que respecta á las personas elegibles, ya al cuerpo electoral, ora al modo de verificarse la elección, ora á la composición en definitiva del tribunal, etc., etc. Para no pecar de prolijos, nos limitaremos aquí á manifestar que las diferencias son bastante notables en lo que respecta á la presidencia del tribunal y á la intervención de la misma en las funciones de este último, pues mientras en unas partes ha de ser el presidente de entre los patronos ó los obreros, en otros lados ha de ser persona extraña, y en España, conforme se ha expuesto, el Juez de primera instancia, y ya se le conceden extensas facultades, ya por el contrario facultades un tanto restringidas.

En lo que afecta á la competencia hay, igualmente, diferencias importantes, tanto desde el punto de vista territorial como en razón á las personas y en razón á la materia. Es, sin embargo, evidente la tendencia á ensanchar la expresada competencia bajo estos dos últimos aspectos, y á fin de extender la acción de estos tribunales, no sólo sobre los obreros propiamente dichos, sino sobre los dependientes de comercio, empleados etc.; á las cuestiones todas inmediatamente derivadas de los contratos de trabajo y á las que las leyes asi-



milan á las mismas, tales, por ejemplo, las relacionadas con los accidentes del trabajo ó las cuotas que los obreros han de satisfacer para las cajas de socorros, instituciones de seguro y demás; y sobre las cuestiones entre patronos y obreros, á las que éstos, por causa del trabajo, tuvieren entre sí. Ha habido ocasiones en que se ha considerado como uno de los fundamentos de la jurisdicción de que se trata el carácter jerárquico de las relaciones entre patronos y obreros, carácter que, indudablemente, contribuye á especializar estas relaciones. Hoy se profesa ese criterio, mas, según manifiestan diversos escritores, se entiende á la par que la relación entre obreros en razón al trabajo, y más si dependen de un mismo patrono, es equivalente á la directa entre empresarios y trabajadores. Y lugar es aquí de recordar, por último, por un lado que suele ser causa de competencia, por lo menos para el efecto de las apelaciones, la cantidad ó entidad de los negocios, y por otro que á veces se instituyen con independencia de los tribunales industriales de competencia general otros relacionados con determinadas industrias, por ejemplo, la minera, que otras veces se distingue el tribunal industrial fabril del comercial, y que en general y según ha habido ocasión de advertir se piensa en tribunales industriales especiales para las cuestiones entre obreros ó entre patronos y obreros agrícolas.

En cuanto al procedimiento, hay acuerdo para reducirle á los términos más sencillos, pero es claro que no deja de haber la distinción de métodos y de reglas á que naturalmente lleva la diversidad de países y de legislaciones; y se puede presumir que de seguir extendiendo la competencia, no se tardará en establecer ante unos mismos tribunales juicios en su tramitación diferentes.

Y es, en fin, muy de observar que por doquiera los tribunales de que se trata aparecen á la vez que como tales tribunales como órganos para la conciliación, al extremo de tener



por anejos oficinas á tal efecto destinadas y llamadas á actuar previamente. Con lo cual la circunstancia de haber ocasiones en que, según se ha manifestado en otro lugar, han sido instituidos para el conocimiento de las cuestiones ó conflictos individuales entre patronos y obreros, pero con vistas, también, á los conflictos colectivos, y el no menos importante hecho de que, según se ha expresado, en múltiples casos á los institutos ideados para los conflictos colectivos se les encomienda el conocimiento de los individuales cual si fuesen tribunales industriales ó consejos de *prud-hommes*, se viene á señalar que, en conclusión, no son en cierto modo sino parte integrante de un género ó clase de instituciones.

En este concepto, de ellos y de todos los organismos llamados á conocer de los conflictos individuales podría decirse mucho todavía, ya considerándolos aisladamente, ya en relación con los organismos ó institutos destinados exclusiva ó principalmente á conocer para los fines de su creación de los conflictos colectivos. Mas después de haber expuesto la multitud de pormenores que acerca de unos y de otros se han consignado, precisa excusar toda nueva cuestión particular ó de detalle. Algunos escritores, considerando á una todas las instituciones de referencia, trazan sistemas, planes de organización que les permiten exponer sintéticamente los problemas capitales. Y á nosotros nos toca ya seguir ese orden, no para defender sistema ninguno, sino para suplir las deficiencias del análisis y poner fin á este ya extenso trabajo.

\*  
\* \*

El régimen económico, que ha sucedido al de gremios y corporaciones, y con él las nuevas condiciones de la industria y de la vida social en general, y hasta la propagación y difusión de extremas doctrinas que hacen desconfiar á muchos



del progreso en el seno de la paz, han alterado hondamente las relaciones entre patronos y obreros. Muchas de esas circunstancias, favoreciendo la aglomeración de estos últimos y haciendo resaltar, cuando no han dado á conocer, múltiples exigencias antes ocultas ó en que no hubo que fijar la atención, han puesto de manifiesto la necesidad de reconstruir hasta llegar á una organización del trabajo propia de los tiempos, garantía de todo interés legítimo, expresión de justicia y base de unión y de armonía entre empresarios y trabajadores. Han nacido y se han desenvuelto las instituciones para prevenir ó resolver los conflictos de que tan repetida mención se ha hecho aquí como fórmula requerida con apremio por las circunstancias, y la primera ó una de las primeras en que cupo pensar para la reconstrucción ó reorganización á que se ha aludido. Otras se han adoptado también, y otras se vislumbran para el porvenir. Todavía se han de descubrir más. Y ya se ve la necesidad de combinar, acaso, acaso prescindiendo de alguna de las tenidas hasta ahora por buenas ó de las que hoy se encuentran entre las llamadas á rendir mayor suma de beneficios. Labor parecida supone toda conquista difícil de lograr. Por lo mismo, sin el auxilio de otras fórmulas y de otros medios que, ó acrecieran su fuerza ó la substituyesen con ventaja, es lógico que en la concepción y en la aplicación de la que hemos analizado haya habido tropiezos, y con ellos indecisiones ó vacilaciones numerosas. Y fuera aventurado afirmar cosa resuelta sobre su porvenir.

Sin embargo, los conflictos entre patronos y obreros se repiten con frecuencia, y según acreditan algunos muy recientes, ofreciendo los más graves caracteres. A decir verdad, de pensar es todavía que las instituciones de que en este estudio se ha dado cuenta, ideadas para prevenirlos ó resolverlos, subsistirán, convenientemente enlazadas con otras de varia índole que habrán de integrar la futura organiza-



ción del trabajo, y que útiles son y, hoy por hoy, no se debe desistir de aplicarlas, mejorándolas y perfeccionándolas cuanto sea posible.

Á este propósito hay quienes estiman que el camino á seguir es el de fomentar, por un lado, los Consejos de fábrica ó explotación, y el de establecer, por otro, las Cámaras de trabajo como instituciones profesionales y dotadas de facultades consultivas, deliberativas, representativas, conciliadoras y arbitrales. Se fijan en todo lo que aquí se ha expuesto en favor de los Consejos de fábrica y en los excelentes resultados que ya han ofrecido. Toman en cuenta la experiencia de Bélgica y demás países que han establecido las Cámaras de trabajo, haciendo notar los singulares servicios que han prestado y los que pueden prestar ya por su carácter de representantes de las dos clases, patronal y obrera, ya por favorecer el trato constante entre la una y la otra, ora por los medios de que pueden disponer para el estudio del régimen industrial y de la vida del trabajo, ora por su conocimiento de las mismas, ya por las relaciones que pueden mantener con las autoridades y con toda clase de centros y organismos encargados de velar por el desarrollo de los grandes intereses sociales, bien por poder ser de un lado base y de otro coronamiento de la organización que los tiempos reclaman de los elementos que concurren al trabajo, ó bien por lo que pueden contribuir al encauzamiento y al progreso de las asociaciones obreras y patronales, á la acción provechosa de las mismas y á la formación de los contratos colectivos, costumbres, usos y prácticas útiles y convenientes. Creen que si las Cámaras citadas han defraudado en algún punto las esperanzas que al crearlas se pusieron en ellas, ha sido porque, por explicables recelos que conviene desechar, más bien se ha tratado de limitar y reducir su labor que de afirmarla y protegerla, y porque las Secciones en que se han dividido y siempre, para cumplir su cometido, se habrán de dividir, no han tenido hasta aquí el





carácter profesional que deben tener, ya que, en resumen, dichas Secciones son las que han de constituir las representaciones profesionales indispensables para atender á la variedad de oficios y á la consiguiente diversidad de necesidades prácticas que la vida del trabajo, íntegramente considerada, supone. Entienden que, establecidas de acuerdo con lo que se acaba de indicar y bien organizadas, cada una de sus Secciones será institución respetada y amada por la industria ó industrias de que traiga origen, y órgano y juez competentísimo, y en que los respectivos patronos y obreros confiarán, para todo cuanto pueda ocurrir. Por estos motivos juzgan que con ellas es como más fácilmente se puede constituir el Consejo regional profesional de conciliación y arbitraje, propio y capaz para conocer de todo género de diferencias y de conflictos, tanto colectivos como individuales, los que, por otra parte y por las razones que más arriba ha habido ocasión de apuntar, consideran íntimamente enlazados y estiman que, por lo mismo, deben ser sometidos al expresado Consejo de igual manera. Sostienen que así, cuantos desenvolvimientos positivos de la conciliación y del arbitraje puedan interesar, se obtendrán sin dificultad. Y que el consorcio entre las instituciones privadas y las oficiales, lejos de sufrir, será mayor y más completo.

Y si no es dudoso que el sistema enunciado ofrece algunos inconvenientes en que sus defensores han parado poco la atención, y que por ello puede ponerse un tanto en entredicho, incontrovertible es, á la par, que su sentido y algunas de las ideas bajo las cuales se ha venido á formular, pueden llevar á mejoras de importancia.

Según se ha indicado ya, no hay que esforzarse para encarecer la procedencia y la utilidad de los Consejos de fábrica ó explotación y de sus Secciones por oficios, y las experiencias, entre otras, de Inglaterra, Bélgica y Alemania excusan los argumentos, y de afirmar es que, mejor que pu-



diera hacerlo el discurso, las ha encarecido la realidad. Y si es cierto que diversos obstáculos se oponen á su difusión, indudable es que no por eso deja de haber fórmulas y maneras para propagarlos y lograr que se establezcan y arraiguen. En este punto las iniciativas particulares y las oficiales deben ejercer su acción á porfía. Y ni un instante se debe cejar. Al cabo los patronos, muchas veces resistentes, con notorio error, á discutir con sus obreros, y la clase obrera, sobradamente prevenida y recelosa frente á la patronal, llegarán á convencerse y verán que los Consejos de que se trata, facilitando la mutua inteligencia, constituyen un medio tan sencillo como adecuado para evitar y resolver multitud de diferencias ó cuestiones de que muy luego se derivan graves y perdurables conflictos. Y conforme vayan apreciando las ventajas del sistema, le amarán más y condenarán, con mayor energía, los apasionamientos y las apelaciones á los procedimientos de coacción y de violencia.

Dígase lo que se quiera en contra, basta pensar en que los llamados conflictos individuales son aquellos en que se persigue una sentencia en términos de derecho, para advertir que pueden y deben ser tratados de modo distinto que los que, por oposición, se denominan colectivos; conozcan de los individuales árbitros ó tribunales del Estado, preciso es que en ellos se llegue á la sentencia declarativa del derecho y reafirmadora del mismo. Esto pide que se procure atender á tales conflictos en vista de su propia condición, y que, al efecto, aparte de lo que se pueda hacer para desenvolver los arbitrajes legales en semejante supuesto aplicables, no deje la ley, sin perjuicio de ello, de atribuir el conocimiento á tribunales oficiales, y menos si se piensa que muchas veces habrá de versar el juicio sobre la interpretación de contratos tan importantes y trascendentales como los colectivos de trabajo. Y, por todo lo que al presente recomienda la jurisdicción especial, á los tribunales industriales. Por ello pueden



ser alabadas las legislaciones que así han procedido, y por consiguiente la española, siquiera ésta, por ciertas particularidades en orden á las cuales se impone una reforma (la información de que da cuenta la Fiscalía del Tribunal Supremo en la brillante memoria leída no hace muchos días en el acto solemne de la apertura de los Tribunales pone de relieve la conveniencia de retribuir de algún modo el cargo de jurado, la de reglamentar de distinta manera lo relativo á multas por faltas de asistencia y la de ordenar mejor el procedimiento; y algo de esto se da á entender en el preámbulo del proyecto presentado á las Cortes para dejar en suspenso la aplicación de la ley), por tratarse, por otro lado, de institución nueva en nuestro derecho, y por prevenciones y recelos en cuya desaparición hay que confiar, no haya dado hasta aquí resultados del todo satisfactorios. Y lo que es más, debe ser atribuído el conocimiento de los conflictos á que se alude á tribunales organizados de manera que, á la vez que las indispensables representaciones de las dos clases, patronal y obrera, entren en ellos, según lo dispone nuestra ley, funcionarios judiciales, y, en su caso, de los que por sus ascensos en la carrera puedan venir á conocer de los recursos que arbitren las leyes.

No hay que decir que todo esto puede y debe establecerse sin perjuicio de lo que hagan dentro de su órbita natural las iniciativas particulares, y que tal circunstancia marca la relación en que se pueden hallar los Consejos de fábrica con los tribunales industriales.

Pero la creación de la institución jurídica oficial que la índole de los conflictos individuales reclama, debe servir de punto de partida para ordenar las relativas á los conflictos colectivos, que, en conclusión, ningún perjuicio puede resultar de enlazarlas, y sí ventajas y beneficios diversos. Esto explica el mecanismo en este punto de leyes sobre tribunales industriales tan importantes como las de Alemania é Ita-



lia, y lo dispuesto en nuestra ley sobre Consejos de conciliación acerca de la manera como se han de formar éstos que, indudablemente, les acerca á aquellos tribunales. Y nada más lógico, por tanto, que el tomar como base los referidos tribunales industriales para la constitución de los Consejos de conciliación, y, en su caso, de los jueces ó tribunales arbitrales destinados á entender en los conflictos colectivos.

Lo mismo, en su virtud, para unos que para otros importa afirmar, cuanto el desarrollo de las industrias lo consienta, el carácter profesional, ó sea la aptitud específica de que hablan muchos escritores. Con lo dicho sobre el desarrollo de las instituciones que se examinan, basta y sobra para advertir que aquellas que se han fundado en relación con industrias ú oficios determinados, han sido las más útiles, y ha poco se ha puesto de manifiesto que los que ven en el sistema de Cámaras de trabajo el ideal, hablan de ellas como de organismos profesionales, no cual se han instituido en Bélgica y otras partes. Y, por obvias, no hay que enunciar las ventajas de tal modo de proceder. El recuerdo, además, de lo dicho en otro sitio respecto á la conveniencia de que las instituciones todas objeto del presente estudio sean profesionales, le justifica y excusa el argumento de nuevo en el mismo sentido.

Y no es dudoso, en fin, que con lo apuntado y tras ello, caben combinaciones sobre la formación de los tribunales y consejos, sobre la manera como se han de desenvolver la conciliación en relación con los diversos conflictos, el juicio con los individuales, el arbitraje, en su caso, con los colectivos, y sobre otros varios puntos de importancia, algunos ya examinados, que prescindimos de indicar por no hacer este trabajo interminable. Y así, y en conclusión, perfeccionamientos ya posibles y otros que el tiempo mostrará, porque no hay que olvidar que la materia pertenece á un derecho nuevo, en orden al cual ha podido decir el profesor Mortara pala-





bras como estas, que transcribimos por versar sobre uno de los extremos á que nos acabamos de referir: «Ningún hombre de buen sentido puede decir y pensar que cualquiera controversia sobre el trabajo, ceñida á los intereses y relaciones entre dos individuos (un patrón y un obrero), se debe reputar resuelta en interés de las dos clases, pero tampoco cabe negar que la máxima de derecho individualista *res inter alios judicata alteri non nocet nec prodest* es incompatible con el régimen de la tutela jurisdiccional de los derechos é intereses colectivos. Si se quisiese buscar en el derecho positivo el auxilio de algún ejemplo ó de alguna analogía, se podría encontrar, con el oportuno discernimiento por la diversidad de la materia, en el sistema de las acciones populares, y más señaladamente en las que miran al derecho político, manifestación activa de la energía individual interesada en defender el derecho, objetivo fundamental de la constitución política..... Transportar del campo político al económico este concepto, reconocer que la defensa del derecho objetivo económico es de interés colectivo de una clase, y que hay casos en los cuales cada miembro de ella, actor popular casi, puede asumir la reivindicación mediante el ejercicio de la acción judicial..... no es, en el estado en que se hallan los institutos de la vida económico-industrial, un paso notablemente atrevido y prematuro.»

Así, pues, concurren las iniciativas particulares y oficiales á la obra empezada y que todo hace ver importa sobremanera seguir, y, tal vez más pronto de lo que ahora cabe imaginar, la deseada pacificación de las relaciones de los que toman parte en la vida del trabajo sea un hecho; que entre un camino lleno de precipicios y de obstáculos y un camino llano, hábilmente arreglado, no puede ser dudosa la elección.

Y no más.

A mi modo de ver, lo expuesto revela que en la materia



examinada, como en todas las que entran en el dominio de la ciencia, la labor universitaria, bien ordenados y combinados los estudios, puede ser altamente beneficiosa. Y por lo mismo, séame permitido tomar de ello ocasión para poner fin á estas páginas dirigiéndome á la juventud que acude á nuestras aulas y exhortándola á que en el campo dilatado de las investigaciones y de los conocimientos científicos trabaje con fe y entusiasmo, segura de que así, no sólo sentirá íntima é inefable satisfacción, sino que contará con la gratitud de todos los amantes del saber y del progreso, y de nuestra hermosa y amada patria.

He dicho.











